



# UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

## TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores.

Autor/es

LUIS ADRIÁN GUTIÉRREZ FUENTES

Director/es

IGNACIO BARRIOBERO MARTÍNEZ

Facultad

Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

Titulación

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

Departamento

DERECHO

Curso académico

2017-18



***Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores.***, de LUIS ADRIÁN  
GUTIÉRREZ FUENTES

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative  
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.  
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los  
titulares del copyright.

Trabajo Final de Máster.

## **Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores.**

Autor: Luis Adrian Gutiérrez Fuentes.

Tutor: Ignacio Barriobero Martínez.

**Máster:** Acceso a la Abogacía



**UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA**

Curso académico 2017-2018.

<b>1. DENOMINACIONES DE ORIGEN:</b>	<b>4</b>
1.1 Introducción.....	4
1.2 Concepto de Denominación de Origen.....	7
1.2.1. Concepto de Indicación Geográfica Protegida. ....	9
1.2.2. Concepto de Especialidad Tradicional Garantizada. ....	10
1.3. Concepto de Evocación. ....	12
1.3.1. Concepto de evocación en la jurisprudencia española: Ejemplos. ....	13
1.3.1.A. El “Mejillón de Galicia” .....	13
1.3.1.B. Caso “Champim”. ....	15
1.4. Marco Jurídico de las Denominaciones de Origen. ....	19
1.4.1. Marco Comunitario.....	19
1.4.2. Marco Estatal. ....	20
1.4.3. Marco Autonómico. La sentencia del Tribunal Constitucional 112/1995. ....	22
1.5. Especial atención a la regulación vitivinícola. ....	25
1.5.1. Nueva Regulación. ....	27
1.5.1.A Titularidad de la Protección.....	29
1.5.1.B Ámbito de Protección. ....	31
<b>2. LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN. LOS CONSEJOS REGULADORES.</b>	<b>34</b>
2.1. Definición. ....	34
2.2. Naturaleza jurídica.....	35
2.3. Composición de los Consejos Reguladores.....	45
2.4. Funciones de los Consejos Reguladores.....	47
2.4.1. Gestión de la Denominación de Origen.....	49
2.4.1.A. Gestión del Registro de Viñas y obtención del vino del año. ....	49
2.4.1.B. Gestión de Registro de Bodegas y crianza y expedición de los vinos. ....	50
2.4.2. La defensa y promoción de la Denominación de Origen.....	51
2.4.3. El control de la denominación de Origen. ....	52
2.5. Personal de los Consejos Reguladores. ....	57
2.6. La Potestad Sancionadora. ....	59
<b>BIBLIOGRAFÍA:</b>	<b>69</b>

## **Resumen.**

A lo largo de la historia, han destacado productos sobre otros similares, ya fuera por sus características o por la calidad de los mismos. Ello ha supuesto que, con el tiempo, esos productos hayan sido objeto de falsificaciones o de producción fraudulenta. Por ese motivo se crearon figuras que trataban de proteger tanto a los productores como a los consumidores. Buscando mantener esa calidad diferenciadora y perdurando con el transcurso del tiempo.

Este trabajo busca establecer que figuras de protección existen al día de hoy, centrándose en las Denominaciones de Origen, y sobre todo que órganos son los encargados de protegerlas, sintetizando sus funciones y potestades adquiridas y cómo son ejercidas, sin olvidar su régimen jurídico y su especial transcendencia.

## **Abstract.**

Throughout history, products have stood out from other similar products, either for their characteristics or their quality. This has meant that, over time, these products have been subject to counterfeiting or fraudulent production. For this reason, figures were created that sought to protect both producers and consumers. Seeking to maintain that differentiating quality and lasting over time.

This work seeks to establish that protection figures exist today, focusing on Designations of Origin, and above all which organs are responsible for protecting them, synthesizing their functions and powers acquired and how they are exercised, without forgetting their legal regime and their special importance.

# 1. Denominaciones de Origen:

## 1.1 Introducción.

En el presente trabajo se pretende abordar algunas de las cuestiones más destacables en materia de las “Denominaciones de Origen”. Dicha figura no es completamente novedosa, sino que su presencia ya se encontraba en la antigüedad, pero sin regulación.

El transcurso del tiempo ha supuesto una serie de modificaciones con respecto a las necesidades e intereses generales de la sociedad, lo que a su vez ha llegado a demandar un mayor control e información de los productos consumidos, tratando de buscar la mayor calidad y dejando más de lado la propia cantidad. Ello se ha puesto de manifiesto mediante una mayor protección de los productos, siendo una exigencia del mercado y de los consumidores.

En los últimos años, esta necesidad se ha visto incrementada, y prueba de ello se encuentra en la creciente demanda por parte de los consumidores, respecto de productos específicos. Especialmente en lo que se refiere a productos agrarios y alimenticios de un origen geográfico determinado.

Todo ello enmarca la creación del actual concepto de denominación de origen, así como la necesidad de dotar a dicho concepto de una regulación jurídica específica. Tratando de alcanzar de esa forma una triple finalidad.<sup>1</sup>

En primer lugar, supone una medida de fomento en lo referido a la diversificación y especialización de la producción agraria. Ello permite dar a conocer o incluso promocionar los productos en aquellas zonas en las que su actividad económica

---

<sup>1</sup> Así lo indica MAROÑO GARGALLO, M.M.: *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 25-26. Textualmente afirma: “los consumidores, porque el elevado nivel de vida actual, los desplazamientos turísticos a otras regiones y el refinamiento en los gustos y en los hábitos perfilan un consumidor que orienta sus preferencias hacia productos con un origen geográfico concreto, al constituir el reflejo de toda una cultura y de un patrimonio compartido por toda una colectividad. A los empresarios les interesará poder utilizarlas en la designación de sus mercancías. Porque al poder ser empleada la denominación por todos los empresarios y productores de la zona geográfica respectiva, los efectos positivos que su empleo produce van a reflejarse en toda el área geográfica en cuestión.”

principal es la agricultura. Y no solo lo anterior, sino también diferenciarlos con respecto a otros por sus propias cualidades, calidades...

En segundo lugar, se busca que el consumidor pueda obtener toda la información posible del producto del que está haciendo uso (Información veraz y correcta).

En tercer lugar y como la finalidad más destacable<sup>2</sup>, se trata de una medida proteccionista del propio mercado y de la competencia. Con ello se busca evitar posibles fraudes o que la información sea engañosa. En otras palabras, se podría afirmar que consiste en la protección legal de los productores amparados con denominación de origen, con respecto a terceros que tratan de imitar sus productos. Pero dicha protección también se extiende a los consumidores, puesto que se aseguran de que el producto adquirido mantenga una garantía mínima de calidad con cierta estabilidad, además de unas características que le son propias.

Y ello porque aquellos productos que ostentan alguna cualidad diferenciada o notoria, relacionada a su vez con una zona geográfica específica, son susceptibles de sufrir posibles falsificaciones en cuanto al origen o del método de elaboración de los productos. Generando graves daños a los productores “auténticos” y desmotivando la continuación de su modelo de producción.

Por todo ello, encontramos más que justificada la introducción de la figura de las “denominaciones de origen”, respalda mediante diversos textos normativos tanto de nivel estatal como comunitario.<sup>3</sup>

A pesar de los beneficios anteriormente citados de las denominaciones de origen, se debe tener un especial cuidado con el acceso de esta protección y su regulación. Ello viene justificado a que, sin el debido cuidado y atención a la hora de establecer los requisitos para el acceso, podría conllevar un proceso de “vulgarización”. Así, la regulación del acceso a una denominación de origen fuera

---

<sup>2</sup> Hay que indicar que tal y como recoge MAROÑO GARGALLO, M.M (obra ya citada), existe un interés general basado en que esa diferenciación de producto interesara a los productores de la zona, los cuales fomentaran la contratación de más trabajadores. Y todo ello producirá efectos beneficiosos para la zona en cuestión en cuanto al empleo y consumo se refiere.

<sup>3</sup> Se analizará posteriormente.

muy genérico, se produciría la existencia de gran número de productos con denominación de origen similar. Eliminándose esa diferenciación buscada.<sup>4</sup>

El autor Benjamín Peñas Moyano establece y sintetiza las principales funciones que desarrolla las denominaciones de origen. Literalmente la indica como:

*“Una función indicativa de la procedencia geográfica, ofreciendo en torno al producto la información relativa a su lugar de procedencia, lo que para el consumidor reviste un indudable interés.*

*Una función indicativa de la calidad del producto, calidad específica que no se basa en meras apreciaciones subjetivas del consumidor, sino en criterios objetivos basados en la existencia de una normativa de producción y medidas de control.*

*Una función condensadora del goodwill, pues las denominaciones de origen constituyen un medio idóneo para cristalizar la buena fama de que goce el producto entre los consumidores.*

*Una función publicitaria, dado que las empresas con productos designados con denominaciones de origen habitualmente van a utilizar las mismas a la hora de anunciar dichos productos.”*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Así lo afirma PEÑAS MOYANO B. *Algunas cuestiones en torno a la denominación de origen como signo distintivo*. Estudios Jurídicos Agrarios, pp: 427. Además afirma: “Esa protección de las denominaciones de origen será adecuada y eficaz si hace que la misma sea reservada para identificar los productos que verdaderamente cumplen las condiciones de procedencia geográfica y calidad exigidas, por lo que habrá de impedirse su utilización para los que no reúnan esas características y origen, por resultar en su caso una actividad engañosa; pero también habrá de impedirse la utilización de indicaciones geográficas que sin engañar realmente en cuanto a la procedencia geográfica, por utilizar vocablos “deslocalizadores” (tales como “clase”, “tipo”, “sistema”, “estilo”, etc.), los cuales ciertamente informan al consumidor de que el producto no procede de la región en cuestión, pretenden real-mente aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por auténticas denominaciones de origen (por ejemplo, vino clase Ribera del Duero).”

<sup>5</sup> PEÑAS MOYANO B. *Algunas cuestiones en torno a la denominación de origen como signo distintivo*. Estudios Jurídicos Agrarios, pp: 426



## 1.2 Concepto de Denominación de Origen.

En primer lugar, debemos determinar cuál es el concepto de Denominación de Origen. El Reglamento nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios<sup>6</sup>, al tratar el tema de la definición del concepto, se remite a su vez al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional<sup>7</sup>, del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979<sup>8</sup>.

Se trata de la definición de Denominación de Origen más aceptada internacionalmente. En su artículo 2 queda definido de este modo:

*“Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”*

Una vez establecida la definición<sup>9</sup>, deberemos entrar a analizarla y diferenciarla de otra figura de protección similar, la Indicación Geográfica Protegida<sup>10</sup>. Como se realizará en el siguiente epígrafe.

---

<sup>6</sup> En adelante RPAA.

<sup>7</sup> Textualmente en su Regla nº2, se indica:

*“ i) se entenderá por “Arreglo”, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979;*

*ii) se entenderá por “denominación de origen”, una denominación de origen tal y como se define en el Artículo 2.1) del Arreglo;”*

<sup>8</sup> Cabe mencionar que en el periodo de tiempo que transcurrió entre 1958, y los reglamentos de 2006, la defensa en cuanto la protección geográfica de los productos entre estados, se desarrolló y reguló mediante convenios entre los estados. Prueba de ello se manifestó en la sentencia del TJCE de 10 de noviembre de 1992, asunto C-3/91, Exportur, S. A., c. LOR, S. A., y Confiserie du Tech.

Así lo afirma MAROÑO GARGALLO, M.M en *“Las indicaciones de procedencia y el principio comunitario de libre circulación de mercancías” “Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XV (1993)”*

<sup>9</sup> Se debe indicar que la definición de DOP y de Indicación Geográfica Protegida es común para todos los productos amparados. No obstante, como se indicará más adelante, en el caso de bebidas espirituosas y otros productos tienen algunas particulares.

<sup>10</sup> En adelante IGP.

En la D.O. exige que su *“calidad o características deban ser exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos”*, en esencia se refiere a que el producto debe de ser característico de una zona geográfica, pero que además su producción también lo sea. Por último, también destaca que su producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

Tratando de interpretar y estudiar los tres factores que componen la definición anteriormente citada, se puede comprobar la gran importancia que contiene el ámbito geográfico y la relación del producto con este. Tal es esa la importancia, que se toma el propio nombre de la zona geográfica para la Denominación de Origen. Pero como ya hemos indicado anteriormente, no solo por las características especiales o diferenciadoras del lugar, sino también por la intervención del factor humano que se aporta al producto.

Por ello, cuanto más exclusivo es un producto, mayor control se exige en todo el transcurso de su proceso productivo<sup>11</sup>. Ello se puede advertir a través del último de los requisitos o exigencias de la definición, no cabe la posibilidad de que la producción (en ninguna de sus fases) se produzca fuera de la zona geográfica.

Con ello se consigue asegurar una diferenciación que resulta difícil de imitar, garantizándose así la distinción con respecto al resto de productos.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea destaca en este sentido la importancia y la justificación de las denominaciones de origen, concretamente en su sentencia de 20 de marzo de 2003 afirma:

*“Las denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial. La normativa aplicable protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que desean aprovecharse de la reputación que éstas han adquirido. Su finalidad es garantizar que el producto por ellas amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados*

---

<sup>11</sup> No obstante, hay que mencionar la sentencia del TJCE de 20 de marzo del 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma y otros contra Asda Stores. El caso se centraba en una serie de empresas británicas e italianas que compraban jamón italiano con denominación de origen. Y posteriormente este era cortado y envasado fuera del ámbito geográfico. Finalmente se determinó que el requisito de envasado en la misma zona geográfica solo era aplicable siempre y cuando se indicara en el pliego.

*caracteres particulares. Estas denominaciones pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir, para los productores que reúnan los requisitos para utilizarlas, un medio esencial de atraerse una clientela. La reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que éstas gozan entre los consumidores”*

#### 1.2.1. Concepto de Indicación Geográfica Protegida.

Un segundo concepto que se debe incluir en este trabajo, para facilitar la comprensión y diferenciación, es la IGP. En el mismo texto legal, se define como:

*“Un nombre que identifica un producto, originario de un lugar determinado, una región o un país. Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y de cuyas fases de producción, al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida.”<sup>12</sup>*

Es más que evidente la semejanza entre ambos conceptos, y donde destaca la relevancia de la zona geográfica. Siendo esta la base o núcleo de ambas formas de protección.

No obstante, se puede observar como en el caso de la IGP, los requisitos son menos estrictos<sup>13</sup>. Lo cual se traduce en una mayor flexibilidad para su obtención. Ello se manifiesta en el último de los requisitos: únicamente es necesario con que la producción, la transformación o la elaboración se desarrollen en zona geográfica específica, pero no como un requisito acumulativo. Es decir, que únicamente es necesario que una de esas fases de producción se realice en la zona geográfica.

Otra de las diferencias que podemos encontrar, como ya se ha indicado anteriormente, es que en el caso de la DO el vínculo con la zona delimitada debe de ser más estrecho. En otras palabras, ya sea la calidad o las características singulares del producto, deben de ser exclusivas o prácticamente consecuencia

---

<sup>12</sup> Así mismo lo establece el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su página web oficial. <http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/informacion.aspx>

<sup>13</sup> Así se manifiesta en la publicación “Las indicaciones geográficas”, realizada por la Sección de Derecho de Diseños y de Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), integrada por María Paola Rizo, Nathalie Frigant y Violeta Ghetu, bajo la dirección de Marcus Höpperge.

de su origen geográfico. Por lo que las materias primas deben de proceder de la zona geográfica y que todas las fases del proceso también se desarrollen.

Sin embargo, con respecto a las IGP, únicamente es necesario cumplir un solo criterio, pudiendo ser una característica o cualidad del producto, o únicamente su reputación. Pero que, en cualquier caso, deben de ser atribuidos a su origen geográfico.

Claro ejemplo de ello lo tienen en la IGP del “chorizo riojano”<sup>14</sup>, el cual su sistema y método de elaboración, transformación etc. se realiza en la Rioja. Sin embargo, no es requisito indispensable que los cerdos tengan origen en la Rioja. Literalmente se establece:

*“El chorizo amparado por la Indicación Geográfica Protegida “Chorizo Riojano” se caracteriza por su forma de sarta o herradura, con un calibre de 30-40 mm. y un peso mínimo de 200 gramos. Consistencia firme y compacta, generalmente de aspecto rugoso, de corte liso, bien ligado y en el que se aprecia una diferenciación clara entre carne y grasa, definen nuestro producto. Los distintos procesos de elaboración: picado, amasado, embutido y secado se efectúan siguiendo estrictos controles en instalaciones auditadas por el propio Consejo de la IGP.”*<sup>15</sup>

### 1.2.2. Concepto de Especialidad Tradicional Garantizada.

En el Reglamento (CE) nº509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios. Se definió el concepto de “especialidad tradicional garantizada”<sup>16</sup> en estos términos:

*“Producto agrícola o alimenticio tradicional que se beneficia del reconocimiento por la Comunidad de sus características específicas mediante su registro de acuerdo con dicho Reglamento.”*<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>

[http://www.alimentacion.es/es/turismo\\_agroalimentario/mapas\\_de\\_alimentos\\_con\\_calidad\\_diferenciada/](http://www.alimentacion.es/es/turismo_agroalimentario/mapas_de_alimentos_con_calidad_diferenciada/) Fecha de consulta 16 de octubre de 2017.

<sup>15</sup> <http://www.chorizoriojano.org> Fecha de consulta 16 de octubre 2017.

<sup>16</sup> En adelante ETG.

<sup>17</sup> Artículo 2 del Reglamento (CE) nº509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006.

Es cierto que se trata de un término incluido en la calidad diferenciada. Pero a diferencia de las DO o IGP, ello no supone un aumento de calidad derivado de la zona de origen o de producción. Sino que únicamente se centra en productos alimenticios o agrícolas que son elaborados mediante otros productos o materias tradicionales, o que su composición o producción se desarrolle mediante un método tradicional.<sup>18</sup>

En este sentido, el RAPP señala que se podrá registrar como ETG los nombres que describan un producto o alimento específico que<sup>19</sup>:

- *Sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o*
- *Esté producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente.*

*Para que se admita el registro como ETG de un nombre, este deberá:*

- *Haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o*
- *Identificar el carácter tradicional o específico del producto.*

A este respecto, podemos encontrar como ejemplo de ETG “Jamón Serrano”<sup>20</sup>. Para el cual es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos acerca de la forma de elaboración e incluso de los requisitos de las materias primas.

---

<sup>18</sup> Motivo principal de que no sea desarrollado de forma más extensa en el presente trabajo, puesto que escapa a los objetivos buscados.

<sup>19</sup> Así mismo lo establece el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su página web oficial. <http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/especialidades-tradicionales-garantizadas/> Fecha de consulta 16 de octubre 2017.

<sup>20</sup> <http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/especialidades-tradicionales-garantizadas/JamonSerrano.aspx> Fecha de consulta 16 de octubre 2017.

### 1.3. Concepto de Evocación.

Todas las medidas proteccionistas, emanadas tanto por el derecho comunitario como por el derecho estatal, están encaminadas a la defensa de los productos legítimamente protegidos por alguna de las figuras mencionadas anteriormente.

Es aquí donde surge el conflicto, puesto que algunos productores ponen un nombre o marca a sus productos que puede llegar a inducir en el consumidor, que tiene alguna característica especial o están relacionados con una zona geográfica que ostente una denominación de origen o indicación geográfica protegida. A ello se le denomina evocación. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea<sup>21</sup>, el concepto de evocación se puede delimitar como:

*“abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación».*

Por lo que existe, *“evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata.”*

Posteriormente<sup>22</sup>, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero del 2008, (Comisión de las CE contra Alemania), se determinó la existencia de evocación porque:

*“pueden llevar a que el consumidor piense, como imagen de referencia, en el queso que se beneficia de la denominación de origen protegida “Parmigiano Reggiano”, cuando esté en presencia de un queso duro, rallado o destinado a ser rallado, revestido de la denominación parmesan.”*

---

<sup>21</sup> En la sentencia del TJCE de 4 de marzo de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y otros,

<sup>22</sup> Así lo establece GARCÍA VIDAL. A. en su artículo: *“La protección de las denominaciones de origen contra los supuestos de evocación.”* Abril 2016.

También cabe mencionar la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2016. En la que se declara:

*“El tribunal nacional debe atender a la percepción de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, concepto este último que debe entenderse como referido a un consumidor europeo y no únicamente a un consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida”.*

### 1.3.1. Concepto de evocación en la jurisprudencia española: Ejemplos.

Recientemente nuestros propios tribunales se han pronunciado en casos de evocación. Las cuáles serán analizados a continuación.

#### **1.3.1.A. El “Mejillón de Galicia”**

En primer lugar, destaca la sentencia núm. 41/2016 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 22 de enero. Relativa al “Mejillón de Galicia”.

Como antecedentes de hecho, el consejo regulador de la denominación de origen “Mejillón de Galicia”, demandó a una sociedad limitada, cuya actividad económica se centraba a la comercialización de mejillón, el cual pertenecía a especies diferentes, en zonas geográficas también diferentes a las que abarca la denominación de origen “Mejillón de Galicia”. Además, el proceso de producción no se encontraba sometido a las exigencias de cultivo recogidas en el pliego de condiciones de la denominación de origen. Sin embargo, en los envases de los productos comercializados se indicaba: “en las rías gallegas”, “fabricado en Galicia” y “envasado en Galicia”.

En primera instancia, se dictó sentencia determinando que existía una *“infracción de la denominación de origen protegida, así como actos de competencia desleal”*. Frente a esta sentencia se interpuso recurso de apelación.

La Audiencia Provincial de Galicia resolvió el recurso, quien lo desestimó íntegramente. En sus fundamentos de derecho se pronunció afirmando que:

*“las denominaciones empleadas en los envases del producto comercializado por la demandada (“DE LAS RÍAS GALLEGAS”, “FABRICADO EN GALICIA” y “ENVASADO EN GALICIA”, para una especie de mejillón que no cumple con las exigencias del pliego de condiciones de la DOP “Mexillón-mejillón de Galicia” (que ampara exclusivamente bivalvos de la especie “mytilus galloprovincialis”) supone una evocación de la denominación protegida, al utilizar una denominación fonética y visual similar, que hace expresa mención al origen geográfico del producto para productos diferentes produciendo la asociación entre tales especies y la zona geográfica de Galicia o de las Rías gallegas. Igualmente, la comercialización de mejillón en conserva de la especie amparada por la denominación sin sujeción a los requisitos de cultivo y técnico-sanitarios previstos en el pliego de condiciones de la DOP bajo la leyenda “DE LAS RÍAS GALLEGAS”, supone una imitación de la denominación.”*

Supone una interpretación interesante la que realiza la audiencia provincial, con respecto a la aplicación complementaria de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En la propia sentencia afirma:

*“El Reglamento 1151/2012, no establece mecanismos procesales específicos, dejando un espacio reservado a los legisladores nacionales. En el caso español esta protección se dispensa por las acciones reconocidas por la legislación de competencia desleal, que desempeña en la materia un papel complementario. Por este motivo resultaba correcto el ejercicio de las acciones de cesación, remoción de efectos e indemnización previstos en el art. 32 LCD ligados a la infracción del art. 13 del Reglamento.”*

Personalmente encuentro lógica esta aplicación, bien es cierto que las propias DO cuentan con mecanismos de protección propios<sup>23</sup>. No obstante, estos mecanismos tienen naturaleza jurídico administrativa, dejando sin cubrir mecanismos de protección civil. Por ello veo justificado complementar esa

---

<sup>23</sup> Tal y como se estudiará más adelante. No obstante prueba de ello es la Ley 24/2003 de 10 de julio, de la Viña y del Vino. Donde se recogen sanciones tales como: sanción con multa, decomiso de la mercancía y suspensión temporal de la actividad.



protección jurídica acudiendo a la Ley de Competencia Desleal. Aunque esta no esté destinada directamente a ese ámbito.

Cierto es que en la sentencia de 1º Instancia realiza esa atribución de forma directa, es decir, atribuye automáticamente una infracción de la Ley de Competencia Desleal únicamente por considerar que se produce evocación con respecto a la DOP.

No obstante, la audiencia provincial rectifica este aspecto, añadiendo que se produce “engaño” así como “actos de confusión” al publicitar su producto bajo esa denominación. De esa forma encuentra justificación en la aplicación de la Ley de Competencia Desleal.

#### **1.3.1.B. Caso “Champim”.**

En segundo lugar, destaca la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm.107/2016, de 1 de marzo<sup>24</sup>.

En este caso, la entidad Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, contra la entidad Industrias Espadafor, S.A. El motivo fue que la sociedad Industrias Espadafor, ostentaba la marca denominada como “Champim”<sup>25</sup>. Este producto se trataba de una bebida gaseosa con sabor a fresa, destinada principalmente al consumo de niños. No obstante, el comité que ostentaba la DO de Champagne alegó que el uso de la marca Champin constituía una infracción de la Denominación de Origen Champagne. Además, también alegó que el uso del distintivo Champin y de los elementos característicos de presentación de las botellas de vino de Champagne constituye un acto de competencia desleal. Por último, solicitó la nulidad del registro de marca Champim.

---

<sup>24</sup> Mas comúnmente denominado “Caso Champin”.

<sup>25</sup> Numero de marca registrada en España: 2060239. Bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, más concretamente para productos de clase 32.

En el Juzgado de 1º Instancia, se estimó parcialmente la demanda interpuesta. Declarando la existencia de una infracción a la DO, así como una infracción de la Ley de Competencia Desleal.

La parte demandada presento recurso de apelación, que fue resuelto por la Audiencia Provincial de Granada. Quien estimó el recurso y revoco<sup>26</sup> la sentencia de 1º Instancia, llegando a desestimar las pretensiones de la parte demandante.

Finalmente, el Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, interpuso recurso de casación, alegando 4 motivos que fueron resueltos por el TS en este orden:

1º Motivo: Infracción artículo 5.1.c) Ley de Marcas:

El TS, realiza una interpretación restrictiva acerca del artículo 5.1c) de la Ley de Marcas<sup>27</sup>. Afirma que al existir una regulación específica acerca de la anulación de marcas por entrar en conflicto con una DO e IGP, se regula en el artículo 118 del Reglamento 1234/2007, el artículo 5.1 c) se debe de aplicar restrictivamente a los casos que regula ese artículo. Y ese mismo artículo establece la exigencia de que los productos que tengan registrada la marca deben de ser comparables a los productos protegidos por una DOP o IGP.

*“Si el propio Reglamento (CE) 1234/2007, al regular las «relaciones con las marcas registradas» en el art. 118 tercedies, ha ceñido la prohibición de registro y la nulidad del registro de marca «que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2 », a que dicha marca se aplique a los vinos y bebidas del correspondiente anexo, no tiene sentido ampliar la prohibición absoluta a todos los casos en que se conculque la protección del art. 118 quaterdecies, apartado 2, subsumiendo su eventual infracción en el tipo previsto en el art. 5.1.f) LM (signos contrarios a la Ley).”*

---

<sup>26</sup> Haciendo uso de los mismos motivos que posteriormente desarrollo y plasmo el Tribunal Supremo en su sentencia.

<sup>27</sup> Artículo 5 Prohibiciones absolutas

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

2º Motivo: infracción artículo 5.1.f) Ley de Marcas:

*“No cualquier evocación justifica la infracción, sino que debe estar ligada a la protección otorgada a las denominaciones de origen. En este caso, el producto al cual se aplica el signo Champin y sus destinatarios difiere tanto respecto de los productos amparados por la denominación «Champagne», que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocación a la que se refería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 4 de marzo de 1999, caso formaggio Gorgonzola (C-87/97), citada por la recurrente. En ese caso en que interpreta el alcance del concepto evocación de una denominación de origen, los productos eran comparables, lo que no ocurre en el presente caso. El Tribunal de Justicia razonó que «el concepto de evocación (...) abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación» (ap. 25). En nuestro caso no se genera esta conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, ni tampoco constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de la denominación de origen «Champagne», razón por la cual la tenue evocación resulta irrelevante.”*

3º Motivo: Infracción artículo 5.1.g) Ley de Marcas:

*“El art. 5.1.g) LM prohíbe el registro de los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio». Con ello se prohíbe el registro del signo engañoso, y se entiende por tal aquel que, por un defecto intrínseco y en relación con los productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones en el mercado.*

*Contrariamente a lo manifestado por la recurrente, la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de Champagne o que sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características principales, que constituiría el presupuesto para que pudiera haberse infringido el art. 5.1.g) LM. A ello*

*contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de origen, y su disparidad respecto de aquellos para los que está registrada la marca «Champin», que impide pueda generarse aquella idea errónea sobre su calidad o procedencia.”*

4º Motivo: Infracción por interpretación errónea e inaplicación del art. 12 LCD:

*“Como hemos declarado en las sentencias reseñadas, el art. 12 LCD contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Para su apreciación es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado, que en este caso no se le niega a la denominación de origen «Champagne». Pero también es necesario que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito suponga un comportamiento adecuado para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Y en este caso no lo es.*

*La demandada no está usando la denominación de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica (una gaseosa de frutas para niños) sea apta para irrogarse el prestigio de la denominación de origen.”*

De esta sentencia podemos extraer como conclusión la interpretación que realiza el TS acerca de la “evocación”. Se puede observar que se requiere que exista una relación directa entre el producto protegido por la denominación de origen y el producto que trata de evocar dicha denominación. Refiriéndome a que deben de ser productos equiparables y que pueda contener alguna característica diferenciadora propia de un producto protegido por DO.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Según GARCÍA VIDAL. A. en su artículo: “La protección de las denominaciones de origen contra los supuestos de evocación.” Abril 2016. Afirma: “No obstante, ante estos argumentos debe tenerse en cuenta que la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo ha abandonado la doctrina *qui iuro suo utitur naeminem laedit*, admitiendo que el derecho positivo de uso de una marca no se reconoce cuando entra en conflicto con un signo distintivo previo. [STJUE de 21 de febrero del 2013 (C-561/2011) y STS núm. 520/2014, de 14 de octubre (RJ\2014\6128)]. Y también es importante, a mi juicio, que en contra de lo que parece decir la sentencia,

## 1.4. Marco Jurídico de las Denominaciones de Origen.

En apartados anteriores ya hemos hecho mención de diversa normativa, tanto comunitaria como estatal, que regula y establece el marco jurídico de las Denominaciones de Origen y de otras figuras de “calidad diferenciada”. No obstante, a continuación, trataré de concretar la amplia y numerosa regulación de la materia.

### 1.4.1. Marco Comunitario.

En primer lugar, indicaremos el marco jurídico comunitario, y su evolución más reciente. Se debe tener en cuenta que la normativa comunitaria se encuentra dividida de forma sectorial.

- Por un lado, se encuentra la regulación de los productos agrícolas y alimenticios, recogidos en el ya mencionado Reglamento núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre del 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Este Reglamento establece unos *"regímenes de calidad como base para la identificación y, en su caso, protección de nombres y términos que, en particular, indiquen o describan productos agrícolas"*<sup>29</sup> con:

*a) características que confieran valor añadido, o*

*b) atributos que aporten valor añadido como consecuencia de las técnicas agrarias o de los métodos de transformación utilizados para su producción, o de su lugar de producción o de comercialización."*<sup>30</sup>

- También encontramos una regulación especial con respecto a las bebidas espirituosas, se trata del Reglamento núm. 110/2008<sup>31</sup> del Parlamento Europeo

---

el artículo 103.2 del reglamento no limita la protección contra la evocación a los casos en que los productos sean comparables (a diferencia de lo que se hace en el apartado 1a.i)."

<sup>29</sup> La lista de productos se encuentra en el anexo nº 2 del presente trabajo.

<sup>30</sup> Artículo 1. Reglamento núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre del 2012

<sup>31</sup> Por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo, y por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen disposiciones de

y del Consejo. Establece las normas de definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas, así como la protección de sus indicaciones geográficas.<sup>32</sup>

- Cabe mencionar la regulación de productos vitivinícolas, recogido en el Reglamento núm.1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas. Establece la organización común de mercados de los productos agrarios, que comprende todos los productos enumerados en el anexo I de los Tratados, salvo los productos de la pesca y de la acuicultura definidos en los actos legislativos de la Unión relativos a la organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura.

- Por último, se encuentra la normativa relacionada con los productos vitivinícolas aromatizados. Regulado en el Reglamento núm. 251/2014<sup>33</sup> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero del 2014. Establece las normas de definición, descripción, presentación y etiquetado de los productos vitivinícolas aromatizados, así como la protección de sus indicaciones geográficas. Se aplicará a todos los productos vitivinícolas aromatizados comercializados en la Unión, producidos en los Estados miembros o en terceros países, así como a los que hayan sido producidos en la Unión para la exportación.

#### 1.4.2. Marco Estatal.

En segundo lugar, pasaremos a analizar el marco normativo estatal, en este caso cabe recordar que parte de la regulación comunitaria ya era y es de aplicación directa en España. No obstante, debe hacerse referencia a nuestra propia regulación, que a continuación sintetizaremos. Poniendo de manifiesto que, si la protección comunitaria de los diferentes productos tiene su origen de la

---

aplicación del Reglamento (CE) nº 110/2008. Así lo indica el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su página web oficial. Ref. ya citada.

<sup>32</sup> En el propio reglamento se realiza un listado de productos, que no añadido al presente trabajo debido a su excesiva extensión. Se puede localizar en: <https://www.boe.es/doue/2008/039/L00016-00054.pdf>

<sup>33</sup> El apartado 3 del artículo 2 define indicación geográfica como una *“denominación que identifica a un producto vitivinícola aromatizado como procedente de una región, un lugar determinado o un país en que una determinada calidad, renombre, u otras características de ese producto, es en esencia atribuible a su origen geográfico.”*

legislación de la propiedad intelectual, en España el antecedente de la regulación de esta figura se encuentra en la normativa vitivinícola.

Así, es en la propia exposición de motivos de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico donde se indica que:

*“El primer marco jurídico de protección de las Denominaciones de Origen españolas data de 1932, momento en el cual nuestro país se dotó del primer marco legal en la materia, Estatuto del Vino, por Decreto de 8 de septiembre, posteriormente elevado a Ley por la de 26 de mayo de 1933 y que tenía por objeto únicamente al vino. Con posterioridad, el marco nacional se modificó a través de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y que extendió el modelo al resto de alimentos. Finalmente, la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, supuso la última legislación nacional específica para el vino. Del mismo modo, cabe citar la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 112/1995) en la que, para hacer una distribución clara de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado en esta materia, establece que «El Estado puede, sin duda, dictar normas válidas –con carácter básico o pleno según corresponda– allí donde las Comunidades Autónomas no tengan la competencia exclusiva. E igualmente puede ordenar las denominaciones de origen que abarquen el territorio de varias Comunidades Autónomas, una actuación que lógicamente sólo pueden efectuar los órganos generales del Estado»”*

Esta ley supone la regulación de aquellas denominaciones de origen que abarquen territorialmente más de una comunidad autónoma.

Además de ello, cabe destacar la presencia de otras normativas que tratan (aunque de forma sucinta) esta materia, tal y como afirma Marta Pulido Polo<sup>34</sup>:

*“En la actualidad, el marco legal nacional vigente relativo a la protección de determinados productos por su origen geográfico es amplio y podría dividirse en normas fundamentales y legislación estatal.*

---

<sup>34</sup> PULIDO POLO M. en su artículo “Historia jurídica de las indicaciones geográficas: una perspectiva desde la gestión de la comunicación en las instituciones”. Publicado en junio de 2016

*Subdividiéndose estas últimas en normas de carácter general y normas de carácter especial. Las normas fundamentales son la Constitución Española de 1978 (en sus artículos 20.1.b), 148.1. 7ª y 149.1. 9ª y 10ª), el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de 1957 (en su artículo 36) y el Acta relativa a las condiciones de adhesión de España a las Comunidades Europeas, de 12 de junio de 1985 (artículo 129) (Milans del Bosch, 1994: 31-35). Entre las normas generales que rigen la legislación del Estado al respecto encontramos la Ley 32/1988 de Marcas (artículos 1º, 11.1.c), 33.1.b) y 3 y del 58 al 72), el Real Decreto 645/1990 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 32/1988 de Marcas (artículos del 21 al 25) y la Ley 3/1991 de competencia Desleal (artículos 1º, 5º, 6º, 7º, 11, 12, y del 18 al 26).”*

#### 1.4.3. Marco Autonómico. La sentencia del Tribunal Constitucional 112/1995.

La Constitución española regula el régimen competencial de esta materia en su Art. 148. Concretamente en su apartado 1.<sup>735</sup> reconoce esta posibilidad.

Todo ello supone que por parte de las Comunidades Autónomas puedan adquirir mediante sus estatutos de autonomía competencias en el ámbito de las denominaciones de origen. Aunque respetando en todo momento la normativa base y la normativa supranacional. Solo algunas comunidades Autónomas disponen de competencias territoriales en esta materia<sup>36</sup>, El resto de comunidades deben de atenerse a la normativa básica estatal y dependiendo del grado de competencias transferidas y asumidas por cada comunidad autónoma.

*“Dentro del marco legal general establecido, las Comunidades Autónomas han regulado en materia de:*

---

<sup>35</sup> El artículo indica: *Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.*

<sup>36</sup> Navarra, Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y La Rioja. Pero en el momento en el que la denominación de origen abarca territorialmente más de una CCAA, se regulará por la Ley 6/2015 (Competencia del Estado Central).



- Ordenación del viñedo: reestructuración y reconversión, plantaciones, derecho de replantación y ayudas al abandono.*
- Ayudas a la industrialización y modernización de instalaciones.*
- Calidad Alimentaria: documentos de acompañamiento, libros de registro.*
- Denominaciones de origen*
- *Figuras de calidad agroalimentaria.*
- Ordenación sectorial: seguros agrarios, interprofesionales.*<sup>37</sup>

No obstante, esta materia no ha estado exenta de conflictos o problemas. Prueba de ello es la sentencia Tribunal Constitucional 112/1995 de 6 de julio.

Se trata de una sentencia que le daba solución a un conflicto de competencia. Concretamente el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña formalizó un conflicto positivo de competencia respecto del Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que el Estado fija las normas a las que deben ajustarse las "denominaciones de origen" y "denominaciones de origen calificadas" de vinos, así como sus respectivos Reglamentos.

La Generalidad de Cataluña alegaba que:

“La Comunidad Autónoma posee competencia exclusiva en materia de denominaciones de origen en colaboración con el Estado (art. 12.1.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), y, denuncia, sustancialmente, que el Estado carece de competencia para dictar estas normas; pues no puede confundirse -se dice- la facultad del Estado para dictar bases y coordinar la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 de la Constitución) -competencia estatal que expresamente limita y condiciona la precitada asunción estatutaria de competencia- con una inexistente potestad normativa del Estado para dictar bases en la materia. Y estas argumentaciones -se concluye- no pueden ser sorteadas, al modo

---

<sup>37</sup> Así lo indica GUILLEM RUIZ J.V. en su tesis doctoral Condiciones que determinan la calidad de los vinos de la Comunidad Valenciana. Año 1999.

de un fraude a las reglas de deslinde competencial, invocando la facultad estatal para ratificar los Reglamentos de las denominaciones de origen, a los efectos de su defensa en el ámbito nacional e internacional, puesto que la potestad de "ratificar" una normativa no puede ser confundida con una potestad legiferante o con una habilitación a la Ley o al Reglamento estatal; por el contrario, consiste en un acto reglado de estricta ejecución. Se señala -finalmente- que el abundante Derecho comunitario en la materia es directamente aplicable por las Comunidades Autónomas sin necesidad de una interposición de normas estatales y, sobre todo, de alterar las reglas internas de distribución de competencias."

En los propios fundamentos jurídicos, el tribunal Constitucional realiza una valoración completa acerca del alcance de la competencia del estado y de las comunidades autónomas.

En síntesis, podríamos afirmar que el tribunal Constitucional indica que en aquellos casos en los que las comunidades autónomas correspondientes no hayan adquirido competencias en esta materia mediante sus respectivos estatutos de autonomía, el estado central podrá regular y establecer normativa para su regulación. No obstante, en los casos en los que únicamente el ámbito territorial afectado pertenezca a la propia comunidad autónoma en exclusiva, la normativa aplicable será la autonómica. Siempre y cuando exista regulación.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Literalmente afirma: "El Estado puede, sin duda, dictar normas válidas -con carácter básico o pleno según corresponda- allí donde las Comunidades Autónomas no tengan la competencia exclusiva. E igualmente puede ordenar las denominaciones de origen que abarquen el territorio de varias Comunidades Autónomas, una actuación que lógicamente sólo pueden efectuar los órganos generales del Estado. Así el propio Decreto de traspasos a Cataluña, en su Anexo, apartado B.2], letra e] dispone que en los Consejos Reguladores de Denominaciones Específicas y Denominaciones de Origen "cuyo ámbito comprenda también parte del territorio ajeno a la jurisdicción de la Generalidad de Cataluña", estará representada ésta "de acuerdo con la normativa que se establezca"; una normativa que por razones territoriales sólo puede en esos casos dictar el Estado; y es sabido que, en la realidad, no son inexistentes las denominaciones de origen de vinos que abarquen varias Comunidades Autónomas como, v. gr., ocurre con la denominación "Cava" (Ordenes de 14 de noviembre de 1991 y 8 de junio de 1992). Pero el Estado no puede utilizar su facultad de ratificación de los Reglamentos, a los estrictos efectos de asumir su defensa en los ámbitos nacional e internacional, para condicionar su aprobación definitiva por Comunidades Autónomas que, como la Generalidad, poseen competencia exclusiva. La filosofía de la colaboración obliga a pensar aquí que la intervención del Estado debe ser necesariamente subsidiaria del ejercicio autonómico de las competencias, en este caso normativas, y no puede llegar hasta su sustitución donde no resulte enteramente imprescindible, y nada se arguye a este respecto que demuestre el carácter indefectible de la intervención del Estado mediante normas."

Finalmente concluyó afirmando que:

*“que, sin perjuicio de su hipotética supletoriedad, el Decreto discutido no es de aplicación directa en Cataluña, puesto que el Estado no posee, según el art. 12.1.5 del Estatuto de Autonomía, facultad para dictar en dicha Comunidad Autónoma normas básicas en la sección de materia que suponen las denominaciones de origen de vinos.”<sup>39</sup>*

### 1.5. Especial atención a la regulación vitivinícola.

Creo conveniente realizar una especial mención a la definición y regulación de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas con respecto a productos vitivinícolas. El motivo principal es debido a la zona geográfica en la que nos encontramos, tan característica y relevante en cuanto al ámbito de DO así como IGP.

En primer lugar, cabe mencionar la definición de DO que se realiza en el capítulo IV del Reglamento núm.1308/2013<sup>40</sup> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas. Concretamente en su artículo 34 se define:

*“denominación de origen: como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 33 (Ámbito de aplicación), apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:*

*i) su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él,*

---

<sup>39</sup> Sentencia Tribunal Constitucional 112/1995 de 6 de julio.

<sup>40</sup> No obstante, en el Reglamento (CE) 479/2008 estableció la organización común del mercado (OCM) vitivinícola e implantó una nueva regulación para los nombres geográficos de vinos, desapareciendo los VCPRD (vinos de calidad producidos en regiones determinadas), e incorporando las DOP (denominación de origen protegida) e IGP (indicación geográfica protegida). Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su página web oficial. Ref. ya citada.

ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica, 100%.

iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica,

iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinífera*”

También se especifica la definición de indicación geográfica como:

“una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 33 (Ámbito de aplicación), apartado 1, que cumple los requisitos siguientes

:i) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico,

ii) al menos el 85% de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica,

iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica,

iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinífera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*”<sup>41</sup>

<sup>41</sup>El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su página web oficial. Ref. ya citada. Sintetiza todo lo anterior reflejándolo en el siguiente cuadro: (a fecha 28 de noviembre de 2017)

VINOS con DOP	VINOS con IGP
Su calidad y características son esencialmente o exclusivamente debidas a su origen geográfico, con sus factores humanos y culturales inherentes.	Posee una calidad, reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico.
100% de las uvas proceden exclusivamente de la zona geográfica de producción.	Al menos el 85% de las uvas procede exclusivamente de la zona geográfica.
Su elaboración tiene lugar dentro de la zona geográfica.	Su elaboración tiene lugar en el área geográfica.
Se obtiene de variedades vnicas pertenecientes a <i>Vitis vinífera</i> .	Se obtiene de variedades vnicas pertenecientes a <i>Vitis vinífera</i> y otras especies del género <i>Vitis</i> .

El Reglamento establece que ciertos nombres usados tradicionalmente constituirán una denominación de origen cuando:

- a) designen un vino;
- b) se refieran a un nombre geográfico;
- c) reúnan los requisitos mencionados en el apartado 1, letra a), incisos i) a iv);
- d) se sometan al procedimiento por el que se concede una protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que se establece en el presente capítulo.

El Reglamento establece que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, incluidas las referentes a zonas geográficas de terceros países, podrán gozarse protección en la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el capítulo.

#### 1.5.1. Nueva Regulación.

Ya hemos mencionado anteriormente la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico. Esta es la más reciente normativa que regula las denominaciones de origen, así como los órganos encargados de la protección de las mismas. Creo necesario centrar un epígrafe a analizar las novedades que esta ley conlleva, así como la regulación más actual.

En primer lugar, de acuerdo con el primer artículo de la ley así como el análisis realizado por Ángel García Vidal<sup>42</sup>, establece el régimen jurídico que aplica a las denominaciones de origen protegidas, así como las indicaciones geográficas protegidas que a su vez se extiendan a un ámbito territorial de más de una comunidad autónoma<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> GARCÍA VIDAL A. en su artículo: La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Ámbito Territorial Supraautonómico, mayo 2015.

<sup>43</sup> Esto es debido a que hay diversas comunidades autónomas que, mediante sus estatutos, han asumido competencias en este ámbito.

Debemos de tener en cuenta que actualmente existen trescientas treinta y dos denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Pero, sin embargo, únicamente hay una docena que son supra autonómicas<sup>44</sup>:

4 de vino (DOP Cava, DOP Rioja, DOP Jumilla e IGP Ribera del Queiles)

2 de jamón (DOP Guijuelo y DOP Jamón de Huelva)

2 de queso (DOP Idiazábal e IGP Queso de los Beyos)

2 de carne (IGP Carne de Ávila e IGP Cordero Segureño)

1 de hortalizas (IGP Espárrago de Navarra)

En segundo lugar, pasando al siguiente artículo, se nombra o estipula los fines que buscados por esta ley. Entre ellos destaca la regularización de las DO e IGP, que se extienden a más de una comunidad autónoma. Establecer un régimen garantista con respecto a su protección. Mas concretamente a los derechos de productores y consumidores. Y la cooperación entre las propias administraciones públicas.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su página web oficial:

El valor económico de las mismas alcanza en vino 1.579 Millones de €, lo que representa el 60% del total de los vinos con DOP y en productos no vínicos 120,6 Millones de euros, lo que supone el 12,5% del total de estos productos con DOP o IGP.

A su vez, la superficie afectada alcanza, en el caso de los vinos, 117.550 has y para los productos agrícolas (Calasparra y Espárrago de Navarra) se sitúa cerca de las 2.000 hectáreas.

<sup>45</sup> En el artículo 2 de la misma ley dice textualmente:

a) Regular la titularidad, el uso, la gestión y la protección de las DOP e IGP vinculadas a un origen cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma, con independencia del tipo de producto amparado, así como el régimen jurídico aplicable a su control.

b) Garantizar la protección de las DOP e IGP como derechos de propiedad intelectual por los medios previstos en esta ley y, en su caso, por los previstos por el Derecho de la Unión Europea que se recoge en la disposición adicional quinta y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

c) Proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando el cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la información que figure en el etiquetado de los productos amparados por una DOP o IGP cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma.

d) Favorecer la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes.

### **1.5.1.A Titularidad de la Protección.**

Otro de los aspectos clave se trata de la titularidad de la protección. Ello quiere decir quién es el sujeto que ostenta la titularidad de los nombres que están protegidos mediante una IGP o DOP. Este aspecto, que se encuentra estrechamente relacionado con lo que posteriormente analizaremos en la naturaleza jurídica de los consejos reguladores, se centra en si son los propios productores quienes ostentan la titularidad de las DO o IG. O sin embargo son los propios consejos reguladores quienes tienen atribuida esa titularidad. Bien es cierto que en las anteriores regulaciones se limitaban únicamente a establecer que los productores<sup>46</sup> eran los que tenían atribuidos el uso de la denominación en sus productos, mientras que los consejos reguladores eran los encargados de la defensa de los mismos.

Esta cuestión produjo diversas posturas doctrinales acerca de la titularidad sobre la denominación de origen. Tal y como sintetiza Ángel García Vidal<sup>47</sup> se encuentra 2 corrientes doctrinales, la primera que defendía la idea de que la titularidad de las denominaciones de origen correspondieran a los empresarios que pertenecieran o se encontraran en el Registro del Consejo Regulador de la denominación de origen.<sup>48</sup> La segunda corriente doctrinal defendía que el titular de la denominación de origen era la propia Administración Pública, desarrollada a su vez mediante el Consejo Regulador encargado de la administración y gestión de la denominación<sup>49</sup>. Mariano López Benítez, de acuerdo con esta corriente, establece que los empresarios o productores que se encuentren en el registro del Consejo Regulador correspondiente no están inmersos o integrados en la propia administración. Debido a que considera que no existe una relación especial de sujeción.

---

<sup>46</sup> Que cumplieran los requisitos estipulados.

<sup>47</sup> GARCÍA VIDAL, A. en su artículo: *La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Ámbito Territorial Supraautonómico*, mayo 2015.

<sup>48</sup> Autores como FERNÁNDEZ-NOVOA, o MAROÑO GARLLANO en su trabajo: *“La regulación de las denominaciones geográficas en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino” Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 24, 2003, págs. 283-318.*

<sup>49</sup> LÓPEZ BENÍTEZ, M. *Las denominaciones de origen*, Cedecs, Barcelona, 1996, 149-187 págs.

Finalmente, el legislador acabo inclinándose por esta segunda corriente, y fue puesto de manifiesto mediante la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino<sup>50</sup>. Así lo hizo constar en su artículo 17:

*“Titularidad, uso y gestión de los bienes protegidos.*

*1. Los nombres geográficos protegidos por estar asociados con cada nivel según su respectiva norma específica, y en especial las denominaciones de origen, son bienes de dominio público y no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.*

*La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde al Estado cuando comprendan territorios de más de una comunidad autónoma y a las comunidades autónomas en los demás casos.*

*2. El uso y la gestión de los nombres protegidos estarán regulados por esta ley y las normas concordantes.*

*3. No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que lo solicite y cumpla los requisitos establecidos para cada nivel, salvo que se hubiera impuesto sanción de pérdida temporal o definitiva del uso del nombre protegido o concurra otra causa establecida en la normativa estatal o autonómica.”*

Posteriormente y centrándonos en la legislación vigente, encontramos en el artículo 12 de la Ley 6/2015 que establece:

*1. Los nombres protegidos por estar asociados con una DOP o IGP supraautonómica son bienes de dominio público estatal que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen.*

*2. No podrá negarse el uso de los nombres protegidos a cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos para cada DOP o*



*IGP, salvo por sanción de pérdida temporal del uso del nombre protegido o por cualquier otra causa legalmente establecida.*

Por lo que la más actual legislación, se inclina por la segunda corriente doctrinal antes indicada. La cual nos indica que la titularidad pertenece a la administración pública.

Otro apartado a destacar en la propia ley es la regulación que se realiza acerca de los consejos reguladores. No obstante, esta materia será objeto de análisis posteriormente en el presente trabajo.

#### **1.5.1.B Ámbito de Protección.**

Continuando con el análisis de la misma ley, Ángel García Vidal<sup>51</sup> en su artículo diferencia otro apartado. Se trata del ámbito de protección, en el propio artículo el autor destaca la presencia del artículo 13 de la propia ley. En el mencionado artículo, la ley hace referencia a la normativa europea o comunitaria que regula el ámbito de protección, con un gran número de epígrafes, así como de contenido. Siguiendo al mencionado autor destacamos unos determinados epígrafes entre ellos:

El epígrafe 4, el cual literalmente afirma: *“Los nombres objeto de una DOP o IGP no podrán utilizarse como nombres de dominio de internet cuando su titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y lo emplee para la promoción o comercialización de productos comparables no amparados por ellas. A estos efectos, los nombres objeto de una DOP o IGP están protegidos frente a su uso en nombres de dominio de internet que consistan, contengan o evoquen dichas DOP o IGP.”*

El mencionado epígrafe, no se limita a reproducir una normativa comunitaria, puesto que este aspecto no se encuentra regulado expresamente, aunque si es posible que se obtenga esa regulación a través de la derivación de las disposiciones de la normativa comunitaria.

---

<sup>51</sup> GARCÍA VIDAL. A en su artículo: La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Ámbito Territorial Supraautonómico, mayo 2015.

Otro de los epígrafes a destacar de la ley, es el epígrafe 7 del mismo artículo. En él se indica:

*“No podrá exigirse a los operadores de una determinada DOP o IGP el uso de marcas en exclusiva para los productos de dicha DOP o IGP. En cualquier caso, la designación y presentación de los productos de dicho operador contendrá elementos identificativos suficientes para evitar que se induzca a error o confusión al consumidor.”*

De acuerdo con su interpretación, la aplicación e implantación de este epígrafe, tampoco deriva del propio derecho comunitario, sino que surge de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto destaca 2 sentencias. La sentencia de 6 de mayo del 2009 y de marzo de 2012. Indicando en esta última:

*“La sentencia de 6 de mayo de 2009 debe considerarse, pues, matizada por la presente de modo que se admita la posibilidad de que una marca comercial designe vinos de diferentes regiones o zonas vinícolas protegidas (sin que pueda imponerse en ningún caso la exigencia de “marcas adicionales”) siempre que la designación y la presentación de los vinos permita, de manera clara y sencilla, identificar la denominación de origen que le corresponde de modo que no induzca a error o confusión”<sup>52</sup>*

En otras palabras, no existe la obligación de que un productor, pertenezca<sup>53</sup> y disfrute de la protección que ofrece una denominación de origen y que a su vez comercialice varios productos, tenga a su vez que registrar más de una marca para poder diferenciar los productos. No obstante, la diferente designación debe de diferenciarse claramente. Por lo que no se tratan de productos iguales o que se encuentran bajo la misma denominación de origen.

Finalmente, el autor del artículo añade dos apartados más, centrados en “el control de las DOP y de las IGP”, así como la “Colaboración entre Administraciones y régimen sancionador”. No obstante, estos apartados serán analizados posteriormente en el presente trabajo de una forma más extensa, por lo que únicamente cabe nombrarlos en este epígrafe.

---

<sup>52</sup> Sentencia T.S. (Sala 3) de 5 de marzo de 2012.

<sup>53</sup> Que se encuentre en el registro del propio consejo regulador de la denominación de origen correspondiente.

Únicamente cabe destacar que en la propia ley se establece que el control oficial acerca de las DOP y de las IGP es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero que a su vez el propio ministerio podrá *“delegar determinadas tareas de control (relacionadas con la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones) a varios organismos de control que actúen como organismos de certificación de producto”*.

Este sistema de control tiene una doble vertiente, tal y como afirma Andrea Moya Latorre<sup>54</sup>, por un lado, se encuentra el sistema de autocontrol<sup>55</sup> que se desarrolla por los propios operadores, y por el otro se encuentra el sistema de control oficial<sup>56</sup>. Este último se faculta al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, concretamente a la Agencia de Información y Control Alimentarios<sup>57</sup> para la verificación de los pliegos de condiciones antes de la propia comercialización del producto. No obstante, y tal como se indica en el mismo capítulo de la ley, en virtud de la normativa europea, se permite delegar determinadas tareas de control a organismos de certificación de producto.

---

<sup>54</sup> MOYA LATORRE, A. en su artículo *“La nueva ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas”* Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015, pp. 669-678.

<sup>55</sup> Concretamente en el artículo 21 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico que afirma:

1. *Los operadores, en todas y cada una de las etapas de producción y elaboración deberán establecer un sistema documentado de autocontrol de las operaciones del proceso productivo que se realicen bajo su responsabilidad, con el fin de cumplir lo establecido en la legislación específica correspondiente y asegurar el cumplimiento del pliego de condiciones de los productos, así como cualquier otra disposición que le sea de aplicación.*

<sup>56</sup> Concretamente en el artículo 22 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que afirma:

1. *El control oficial de las DOP e IGP antes de la comercialización consistirá en la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de un producto. Afectará a todas las etapas y actividades que se recojan en el mismo, incluido, en su caso, la producción, la manipulación, la clasificación, la elaboración, la transformación, la conservación, el envasado, el almacenamiento, el etiquetado, la presentación y el transporte.*

<sup>57</sup> Abreviado “AICA”, creada por la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

## 2. Los Órganos de Gestión. Los Consejos Reguladores.

Ya hemos adelantado que la gestión que se desarrolla sobre las denominaciones de origen es llevada a cabo por los Consejos Reguladores. Se trata ahora de analizar esta figura; especialmente su naturaleza jurídica y su potestad sancionadora. No obstante, centrándome sobre todo en los Consejos Reguladores vitivinícolas, debido a la situación territorial en la que nos encontramos, además de su relevancia dentro de las propias denominaciones de origen.

### 2.1. Definición.

La ley 6/2015, de 12 de mayo, en su artículo 15, ya hace alusión a que la gestión será llevada a cabo mediante el órgano “consejo regulador” en estos términos:

*“La gestión de una o varias DOP o IGP podrá ser realizada por una entidad de gestión denominada Consejo Regulador, en el que estarán representados los operadores inscritos en los registros de la DOP o IGP correspondiente y que deberá disponer de la previa autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos reglamentariamente”*

Pero el citado artículo nos ofrece una definición clara de que es un consejo regulador, por lo que es necesario analizar más normativa, donde este aspecto sea establecido o tratado. Podemos acudir a la definición que establece la ORDEN APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" y de su Consejo Regulador<sup>58</sup>. En su artículo 35 se define como:

*“El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con atribuciones decisorias en cuantas funciones se le encomiendan en este Reglamento.”*

---

<sup>58</sup> Indicar que este Reglamento era anterior a la entrada en vigor de la Ley 6/2015.

También encontramos más regulación en otros textos legales, como en el artículo 10 de la Ley catalana 15/2002, de 27 de junio<sup>59</sup>, de ordenación vitivinícola.

Por lo que podremos afirmar que los Consejos Reguladores *“se tratan de corporaciones de derecho público a las cuales, se les atribuye diversas funciones entre las cuales se encuentran: gestión de la denominación de origen, con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad jurídica.”*<sup>60</sup>

Pero no solo ello, sino que en la propia jurisprudencia podemos encontrar que se ha dictaminado: *“Se está en presencia de un órgano administrativo que tiene encomendadas funciones de control e intervención administrativa sobre la producción, elaboración y calidad del vino amparado por aquella Denominación de Origen. Concretamente, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2003. Se afirma que: “los consejos reguladores no son, en realidad, un órgano desconcentrado de la Administración, regido por normas administrativas, sino que son unas corporaciones profesionales de derecho público o representativas de intereses económico-sectoriales, constitutivas de asociaciones de base privada (a las que la Administración se limita a regular, delegándoles ciertas facultades de naturaleza pública).”*<sup>61</sup>

## 2.2. Naturaleza jurídica.

En primer lugar, encuentro necesario establecer el contexto del origen de esta figura. Fue a partir de 1930 cuando comenzó la propia regulación de las

---

<sup>59</sup> “Artículo 10 Definición, estructura y funcionamiento

1. Los consejos reguladores se constituyen como corporaciones de derecho público a las que se atribuye la gestión de la denominación de origen.

2. Los consejos reguladores tienen personalidad jurídica propia, autonomía económica, plena capacidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones. En lo que concierne al régimen jurídico, los consejos reguladores están sujetos con carácter general al derecho privado, excepto en las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades o funciones públicas, en las que deben sujetarse al derecho administrativo.

3. Puede interponerse recurso contra todos los actos y resoluciones de los consejos reguladores sujetos al derecho administrativo, en el plazo y con los requisitos que establecen las leyes de procedimiento administrativo.”

<sup>60</sup> Tal y como ya indiqué en mi trabajo final de Grado. “La administración corporativa” 2016.

<sup>61</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2003 (Sala Tercera, Sección Segunda, ponente J. Rouanet

Denominaciones de Origen en la variada normativa estatal, y con ello los órganos que llevarían acciones como el control y gobierno. Concretamente en España, se estableció esta figura mediante el Estatuto del Vino de la II República. Previendo a su vez la promulgación de sus respectivos reglamentos. Los cuales se realizaban mediante la publicación de las correspondientes Órdenes Ministeriales, En la actualidad estas han sido sustituidas por Ordenes de las Consejerías de Agricultura de las diferentes Comunidades Autónomas, con la excepción de aquellos consejos reguladores dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y que se trata de aquellos que corresponden a denominaciones que abarcan más de una comunidad autónoma.

Una vez expuesto el contexto, debemos proceder al análisis de la naturaleza jurídica de los consejos reguladores. En primer lugar, cabe manifestar que esta cuestión no ha sido pacífica, debido a las diversas corrientes doctrinales.

Tal y como establece José Luis García Ruiz<sup>62</sup>, un sector minoritario de la doctrina administrativa entendió que se trataba de entes sui generis carentes de personalidad jurídica. Esta posición minoritaria surgió como consecuencia de una interpretación literal de un precepto de la Ley 25/1970, de la Viña, el Vino y los Alcoholes (el Estatuto del Vino de 1970). Esta norma establecía la forma de constituirse los Consejos Reguladores y sus funciones<sup>63</sup>, pero también la creación del Instituto Español de Denominaciones de Origen<sup>64</sup>. Y al respecto mencionaba a los consejos Reguladores como órganos desconcentrados de aquel.

Por el contrario, la doctrina mayoritaria entendía que la condición de órgano desconcentrado había que referirla al ejercicio de las funciones del INDO en el territorio de cada denominación de origen, pero no impedía el carácter previo de los Consejos Reguladores como corporaciones. Se trataba para esta doctrina de un órgano de naturaleza mixta que combinaba el principio de autoorganización de los sectores, sometido al Derecho privado, con el ejercicio delegado de

---

<sup>62</sup> GARCÍA RUIZ, J.L. en su trabajo: Denominaciones de origen y consejos reguladores. Cuadernos de derecho para ingenieros. Organismos reguladores. Coordinadora: Carmen Alonso. Editorial La Ley. Año 2009 Pag: 172-198.

<sup>63</sup> Se encontraba en el Capítulo Segundo del Título III.

<sup>64</sup> En adelante INDO como abreviatura.

determinadas funciones públicas, sometido al Derecho administrativo y su correlativo formalismo.

Finalmente, este conflicto jurídico encontró solución mediante la ya mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2003, recaída en el recurso de casación 1162/1997, que estableció:

*“los Consejos Reguladores no son, en realidad, un órgano desconcentrado de la Administración, regido por normas administrativas, sino que son unas Corporaciones profesionales de derecho público o representativas de intereses económicos o sectoriales, constitutivas de asociaciones de base privada (a las que la Administración se limita a regular, delegándoles ciertas facultades de naturaleza pública”.*

El mismo autor, hace alusión a que en la Ley 24/2003 ha transformado en voluntario este carácter de corporaciones de Derecho público, de forma que habrán de ser los propios sectores profesionales los que opten en cada DO por constituirse como tales corporaciones o pasar a ser simples asociaciones privadas. Asimismo, la Ley dispone que la denominación de Consejo Regulador es de uso exclusivo para identificar el órgano de gestión de las denominaciones de origen <sup>65</sup>, excluyéndose por tanto de esta nomenclatura a los órganos de gestión de las indicaciones geográficas de inferior nivel (tales como vinos de la tierra, vinos con indicación geográfica, así como los denominados por la ley como vinos de pago.

No obstante, tras la entrada en vigor de la Ley 6/2015, en su artículo 17 establece que los órganos de gestión de las denominaciones de origen podrán adoptar la forma de corporación de derecho público<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Que a su vez pueden complementarse con el adjetivo de calificadas si, como rasgo más definitorio, comerciaban toda su producción exclusivamente embotellada.

<sup>66</sup> Literalmente en el artículo afirma: *Artículo 17 Régimen jurídico*

*Las entidades de gestión podrán adoptar la forma de corporación de derecho público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. A estos efectos:*

*a) Se relacionarán con la Administración General del Estado a efectos de esta ley a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*

*b) Adquirirán personalidad jurídica desde que se constituyan sus órganos de gobierno.*

*c) Se regirán por el derecho privado. No obstante, sus actuaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en la presente ley, a los reglamentos que la desarrollen, a la normativa europea que sea de aplicación, a sus estatutos y, en el ejercicio de potestades o funciones públicas, al Derecho administrativo.*

Una vez establecido que, por norma general, los Consejos Reguladores son corporaciones del derecho público o administraciones corporativas, deberemos entrar a analizar cuál es la propia naturaleza jurídica de las mismas.

Para ello me permito traer a colación el análisis que realice sobre esta misma materia en mi trabajo final de grado, *“La administración corporativa” en 2016*. Ya establecí que la naturaleza jurídica de las administraciones continúa siendo “terra nullius”, ya que al día de hoy aun es objeto de debates doctrinales<sup>67</sup>. El

---

d) *Estarán integradas por los operadores inscritos en los registros oficiales de la DOP o IGP correspondiente.*

e) *Elaborarán y aprobarán unos estatutos que deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que deberán incluir, al menos, sus fines y funciones, organización, derechos y obligaciones de los operadores que los integren, régimen económico y financiero, control interno, de existir, y régimen disciplinario. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con carácter previo a denegar los estatutos someterá los mismos al dictamen del Consejo de Estado.*

f) *La estructura y funcionamiento deberán ser democráticos. A tales efectos podrá entenderse los sistemas de representación basados en el voto ponderado.*

g) *Realizarán cualquier otra función que, con independencia de las establecidas en la presente ley, les atribuya el ordenamiento jurídico, sus estatutos o resulten del pliego de condiciones de la DOP o IGP que sean compatibles con su naturaleza y con la normativa vigente.*

h) *Además de las funciones contempladas en el artículo 16, podrán realizar las siguientes que habrán de realizar de acuerdo con la normativa nacional y europea, y en ningún caso se deberá facilitar o dar lugar a conductas contrarias a la competencia incompatibles con los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:*

1.º *Llevar los registros oficiales exigidos por las normas de aplicación, incluidos los registros de operadores.*

2.º *Adoptar, en los términos previstos en la Política Agrícola Común y en el marco del pliego de condiciones aplicable a cada DOP o IGP, para cada campaña, según criterios de defensa y mejora de la calidad, los límites máximos de producción y de transformación o la autorización de cualquier aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos. Dichas decisiones se harán públicas de forma que se garantice su posibilidad de acceso a todos los interesados y se comunicarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quien, cuando proceda, comunicará a la Comisión las medidas adoptadas.*

3.º *Emitir certificados de producto u operador acogido a la DOP o IGP a requerimiento del interesado que lo solicite.*

4.º *Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas comerciales, que se comunicarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se harán públicos de forma que se garantice su posibilidad de acceso a todos los interesados.*

5.º *Establecer los requisitos y gestionar contraetiquetas, precintos y otros marchamos de garantía.*

6.º *Realizar todas aquellas funciones que les sean expresamente asignadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relacionadas con las DOP e IGP, excluido el control oficial, salvo en las condiciones previstas en el artículo 23, en relación con los intereses tutelados por la figura de protección.*

*Las resoluciones que se adopten respecto del ejercicio de estas funciones podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*

<sup>67</sup> Así lo pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en su sentencia 49/2000: “Existe una cierta confusión doctrinal acerca de si ha de enmarcarse la actividad de los Colegios Profesionales en el ámbito de los fenómenos de transferencia y delegación de funciones públicas a particulares, lo que conlleva una tesis esencialmente privada de los mismos, o por el contrario, han de ampliarse los límites de la jurisdicción contenciosa en torno a la fiscalización de su actividad”



motivo principal de que sea una materia conflictiva es por los pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional.

Según el autor Javier Cepeda Morras<sup>68</sup>, quien defiende el carácter “híbrido” de la administración corporativa, razón por la que la doctrina no ha podido llegar a alcanzar un consenso unitario al igual que unánime en lo referido a su naturaleza. Existen corrientes doctrinales que defienden que se trata de una administración Institucional, al igual que otras que la determinan como “Corporaciones públicas de base privada”

Así, destacan dos órdenes de ideas:

- “La primera de ellas, se centra en la falta de categorías dogmáticas depuradas. Este hecho deriva a su vez en la existencia de una gran diversidad de entes con caracteres muy diferentes, que surgen en la organización estatal. Dada esta diversidad, es necesario la construcción unitaria de las Administraciones no territoriales (institucional y corporativa) las cuales, y de acuerdo con los autores GASPAR ARIÑO ORTIZ y JOSÉ MARÍA SOUVIRON MORENILLA quienes afirman que no aprecian “la clara diferencia de naturaleza existente entre las corporaciones, como entidades de base asociativa representativas de intereses, y los servicios públicos personificados, incluyéndolos a todos bajo el genérico concepto de administración corporativa, corporaciones de servicios o simplemente corporaciones públicas<sup>69</sup>.”

- En segundo lugar, la propia problemática que se produce en cuanto a la consideración de la Administración Corporativa. En realidad se trata, a su vez de la disputa relativa entre la concepción “subjetiva” de la Administración como criterio definidor del derecho administrativo (se trata de la tesis mayoritaria en la doctrina en su momento<sup>70</sup>), con respecto

---

<sup>68</sup> CEPEDA MORRAS, J. en su trabajo: La Administración Corporativa: Régimen Jurídico y Tipología” Publicada en la obra Derecho Público y Administración de la Comunidad de Madrid. Año 2008 Pag. 943-946

<sup>69</sup> ARIÑO ORTIZ-SOUVIRON MORENILLA, “Constitución...” pág. 126.

<sup>70</sup> Salvo, Fernández Rodríguez T.R. “al considerar como un supuesto de delegación o de descentralización a favor de particulares el ejercicio de ciertas funciones públicas por las Corporaciones de derecho Público, circunstancia que le lleva a rechazar su calificación como administraciones.” Así lo indica el autor FANLO LORAS A. En su obra “El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales” pág. 32

a la concepción “objetiva”, sostenida por el autor ARIÑO ORTIZ, el cual indica que “se trata de personas jurídico-públicas, aunque no encuadradas en la organización estatal: no son Administración en sentido subjetivo, sino objetivo”<sup>71</sup>

Fruto de las diversas corrientes doctrinales, ha producido que otros autores hayan manifestado su propio punto de vista, aportando de esa forma sus propias interpretaciones y teorías.

Destaca el profesor Antonio Fanlo Loras, quien en su trabajo<sup>72</sup> “El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales” analiza y llega a sintetizar las diversas corrientes doctrinales, en tres tesis:

1º- Tesis Tradicional.

Esta tesis es defendida por autores como: Garrido Falla<sup>73</sup>, Baena del Alcázar Boquera, Entrena Cuesta<sup>74</sup> y Martín Mateo. Estos autores afirman que las propias administraciones corporativas “*son en realidad personas jurídico-públicas que quedan integradas dentro de la Estructura de la Administración con las consecuencias que ello conlleva.*”<sup>75</sup> La idea principal se basa en que “*denominación legal como corporaciones de Derecho Público y, además, en la rotundidad con la que el artículo 1.2c) LJCA las incluye a los efectos del control*

---

<sup>71</sup> ARIÑO ORTIZ-SUOVIRON MORENILLA, “Constitución...” pág. 125.

<sup>72</sup> FANLO LORAS A. en su trabajo El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales. Editorial Civitas. Edición 1992. Pág 31-39

<sup>73</sup> Revista Jurídica de Catalunya, año 1987. Pág 102 y siguientes: “Se trata de administraciones Públicas de carácter muy especial; en tanto por su naturaleza asociativa, como por los fines hacia los que fundamentalmente enderezan su actividad, consistentes, en sustancia, en la defensa de los intereses de sus miembros.”

<sup>74</sup> ENTRENA CUESTA. Curso de derecho administrativo. Madrid: Tecnos, 1994, p. 230. Afirma: “Las corporaciones son entes públicos institucionales. (...) entre nosotros creemos que no puede plantearse el problema de *lege data*, dado que, de una parte, el carácter público se atribuye de manera específica a las corporaciones, por las normas que las crean o reconocen y, de otra, la propia ley de la jurisdicción contenciosa-administrativa les asigna, de forma general, esta naturaleza al establecer que se entenderá por administración pública las corporaciones sometidas a la tutela del estado o de alguna entidad local. Claro está que ello no implica que todos sus actos sean administrativos, pues frecuentemente se moverán en la órbita del derecho privado. Aún más, a diferencia de lo que ocurre en otros restantes sectores de la administración, puede afirmarse que el derecho administrativo no es el ordenamiento jurídico común y normal de las corporaciones de este carácter, sino que éstas actúan, como regla, sujetas al derecho privado, y sólo excepcionalmente, se mueven en la órbita de aquél: en la medida en que ejercen, por asignación del legislador, funciones públicas, como ha proclamado la STC 76/1983, de 5 de agosto.”

<sup>75</sup> GUTIÉRREZ FUENTES L.A. La administración corporativa. Trabajo final de Grado 2016. Universidad de la Rioja.

*por la jurisdicción contencioso-administrativa en el concepto de Administración Pública.”*<sup>76</sup>

Ello viene a reforzar la idea de que, en realidad solo se puede llegar a considerar administración pública, en la medida en que estén a su vez sujetas a la tutela del estado. Además, no implica que toda la actividad que desarrolle estas instituciones sea administrativa. Lo cual nos lleva a indicar que su régimen ordinario debe de ser regido por el derecho privado y excepcionalmente, en el momento que ejerciten funciones públicas, se regirán por derecho público.

Una de las características propias de estos órganos, que puede respaldar la postura anteriormente mencionada, es la necesidad o el carácter obligatorio de la adscripción a estas Corporaciones, puesto que en realidad no hay justificación suficiente para defender dicha obligatoriedad en el caso de que los consideremos como entes privados.<sup>77</sup>

## 2º Tesis.

- Otra de las teorías más destacada, es la defendida por autores como García de Enterría y T.R. Fernández los cuales llegan a afirmar: *“los colegios profesionales son corporaciones sectoriales de base privada, es decir, grupos sectoriales de personas asociadas alrededor de alguna finalidad específica. La cualidad de los miembros de estas corporaciones está determinada por una condición objetiva que hacer relación al fin corporativo específico: una cualidad profesional.”*<sup>78</sup>

Esta tesis defiende la postura de que realmente se trata de entes principalmente privados, pero que sin embargo desarrollan una serie de potestades públicas que han sido a su vez delegadas por la propia administración. Los defensores de esta tesis alegan que los intereses reales, que son perseguidos por dichos órganos, son en realidad privados. Es decir que aunque desarrollen ciertas

---

<sup>76</sup> FANLO LORAS A. en su trabajo El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales. Ob Cit. Pág. 31-39

<sup>77</sup> Trabajo final de Grado. 2016. Referencia ya citada.

<sup>78</sup> FANLO LORAS A. en su trabajo El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales. Ob Cit. Pág. 31-39

funciones públicas, verdaderamente se busca satisfacer los intereses propios de los miembros que formen el ente.

Antonio Fanlo Loras afirma en su trabajo que: *“En realidad no son por naturaleza administración públicas, aunque sean entidades de Derecho Público, sino entes autoadministración cumplido por entidades propiamente privadas (explicable como un supuesto de descentralización) que no justifica la equivocada identificación subjetiva en cuanto a la administración.”*<sup>79</sup>

3º- Tesis. Son personas Jurídico-Públicas, aunque no encuadradas en la organización estatal.

Se trata de una tesis intermedia (defendida por autores tales como Ariño Ortiz con Suoviron Morenilla) en la que se defiende que los Colegios Profesionales “son personas jurídico-públicas, aunque no encuadrados en la organización estatal, separados -o separables- de la Administración del Estado<sup>80</sup>.” Antonio Fanlo resume esta postura afirmando que esta corriente reivindica: *“un derecho público de las corporaciones y la consideración de estas como entidades públicas que forman parte del sistema institucional del estado, como “tertium genus” (personas públicas, no Administración, no estatales) sin incurrir en la identificación pura y simple con la Administración orgánica ni con las demás entidades asociativas privadas a las que se confían tareas administrativas.”*<sup>81</sup>

Con respecto al profesor Antonio Fanlo Loras su postura es a favor de la naturaleza pública de la figura corporativa. Las razones en las que se basa, podemos sintetizarlas en:

1- *“Difícilmente se entendería la solución definitivamente adoptada por el Tribunal Constitucional en cuanto al título competencial (art. 149.1.18 de la CE) que habilita al estado para dictar la legislación básica en relación con la organización y competencias de las corporaciones del derecho público,*

---

<sup>79</sup> FANLO LORAS A. en su trabajo: El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales. Ob Cit.

<sup>80</sup> ARIÑO ORTIZ, GASPARD Y SOUVIRON MORENILLA, Constitución y Colegios Profesionales. Unión Editorial. Año 1984.

<sup>81</sup> FANLO LORAS A.: El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales. Ob Cit.

*interpretación que ha corregido el tenor literal de algunos Estatutos de autonomía.*

*2- La utilización del verbo “participar” puede resultar equívoca, pudiera entenderse que sólo una parte de la misma tiene naturaleza de Administración y la otra no; sin embargo, desde un punto de vista organizativo, no cabe siquiera pensar en esa posibilidad: no hay híbridos organizativos, o se es o no se es, o se tiene personalidad pública o no se tiene, pero no cabe “participaciones”. Distinta es la cuestión de las funciones que realicen, de la naturaleza de las mismas y del régimen jurídico mixto al que está sujeta la actividad de los entes corporativos.*

*3- Su encuadramiento en el sistema de Administraciones Públicas es también indudable, lo que no quiere decir que sea Administración Pública del Estado. Son Administraciones. La diversidad y pluralidad de Administraciones establecidas entre todas ellas hoy no plantea problema dogmático alguno. Se puede hablar de la descentralización como principio explicativo de esa diversificación, de ese encuentro Estado-Sociedad. Claro está que no todas las personas jurídicas responden a los mismos principios organizativos, ni a la amplitud de sus poderes es la misma. Defender el carácter de Administraciones de los entes corporativos no significa «administrativizar» la totalidad de su actividad. Esa duplicidad de funciones y de régimen jurídico constituye una de sus peculiaridades.*

*4- Sólo configurándolas como personas jurídicas públicas (Corporaciones de Derecho Público) tienen justificación plena algunas de sus características (obligatoriedad de pertenencia, monopolio o exclusividad de las funciones públicas realizadas) Frente a quienes han sostenido que la Constitución no prefiguraba la opción del legislador ordinario en cuanto a la naturaleza pública o privada de los entes corporativos, ha de sostenerse que, la naturaleza pública es consustancial a su esencia, como para el caso de los Colegios profesionales se deduce de los debates parlamentarios relativos a la elaboración del actual art.36 CE. El dato de la obligatoriedad de pertenencia, junto al del monopolio o exclusividad de las funciones públicas realizadas por los entes corporativos en su ámbito territorial (lo que no supone impedimento alguno para reconocer la*

*libertad de asociación y sindicación a los miembros), no tendrían adecuada explicación si no existiera la personificación pública.”<sup>82</sup>*

### Conclusión.

Por todo ello, la tesis que resulta ser la más aceptada por parte de la doctrina, determina que las administraciones corporativas son entidades que ostentan una naturaleza pública. Su objetivo es el de garantizar que se desarrolle un servicio público que sea eficiente y adecuado. Tratando de buscar los intereses generales, sin que ello vaya en contra de que también se cumplan o se vean satisfechos los intereses particulares de cada administración corporativa. Prueba de ello son los consejos reguladores debido a que, en una primera valoración y de forma aparente, únicamente se persigue los intereses de los miembros del consejo regulador. Sin embargo y como ya expuse al comienzo de este trabajo, existe una especial transcendencia en ofrecer a los consumidores productos originales y que reúnan una serie de especiales características y cualidades. Protegiendo de las reproducciones de productos que no los reúnen. Por todo ello, deberá ser de aplicación la normativa administrativa en aquellas acciones o actuaciones en las que se desarrollen o ejerciten sus funciones públicas.

Centrándonos en los propios Consejos Reguladores, ya hemos mencionado que no hay obligación de que estos sean administraciones corporativas, sino que también existe la posibilidad de que se formen mediante asociaciones privadas. No obstante, en tal caso, estas no tendrán ni las potestades a la hora de gestionar las denominaciones de origen, ni tampoco podrán regular denominaciones de origen protegidas y calificadas. Limitando por tanto consideradamente su ámbito de actuación y sus potestades.

Debido a la extensión de la diversa jurisprudencia que se ha pronunciado a este aspecto, queda adjuntada como Anexo nº 3.

---

<sup>82</sup> FANLO LORAS A.: El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales. Ob Cit. Pág. 31-39

## 2.3. Composición de los Consejos Reguladores.

Dentro de la propia composición de los Consejos Reguladores, se puede indicar que su base privada está compuesta por las personas<sup>83</sup> adscritas en la denominación de origen. Debemos de tener en cuenta que esa adscripción es un requisito obligatorio para poder llegar a hacer uso de la denominación de origen. Pero no solo ello, sino que el hecho de inscribirse conlleva a su vez el sometimiento al Reglamento del mismo. Así como a la potestad del propio Consejo Regulador, que este ejerce para fortalecer el cumplimiento del Reglamento.

A este respecto cabe señalar como modo de adscripción, dos tipos de registros básicos. Por un lado, y en el ámbito vitivinícola, se encuentra los registros de los viticultores (agricultores) y el propio de los vinicultores (bodegueros). Por otro lado, refiriéndome al ámbito agroalimentario, destaca el registro correspondiente de los productores y el de los transformadores-comercializadores.

En virtud del principio de autoorganización, cada propio Consejo Regulador podrá establecer en sus propios estatutos, su composición y órganos. Aunque con la obligación de tener un órgano de gobierno<sup>84</sup>.

Igualmente, podemos afirmar que generalmente y debido al principio de autoorganización, el Pleno de este órgano queda constituido por el número de Vocales establecido en el Reglamento, los cuales a su vez lo serán de representación por mitades de cada uno de los sectores referidos. Esta representación a su vez deriva de un proceso electivo que tiene lugar de forma separada en cada sector y cada inscrito tiene, como norma general, derecho a un voto. Por lo que podemos afirmar que se trata de un sistema representativo

---

<sup>83</sup> Ya sean físicas o jurídicas.

<sup>84</sup> Artículo 15. Ley 6/2015. Literalmente indica: *“Dicha entidad de gestión cumplirá, al menos, las siguientes condiciones:*

*a) Tener personalidad jurídica propia.*

*b) Contar con un órgano de gobierno, donde estén representados de manera paritaria todos los intereses económicos y sectoriales que participan de manera significativa en la obtención del producto protegido.*

*c) Contar con los medios necesarios para poder desarrollar sus funciones.*

*El plazo para resolver por parte del órgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se determine reglamentariamente sobre la solicitud de autorización será de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud. El transcurso de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa permitirá al interesado entender desestimada su solicitud.”*

de carácter democrático en el que el voto es igual y secreto. Por ello y tal y como indica José Luis García Ruiz<sup>85</sup>. *“Ello conduce en principio a la formación de un Pleno integrado por dos sectores, cada uno con el mismo número de Vocales, lo que introduce en los Consejos el principio de paridad entre productores y comercializadores y, dentro de cada sector, el principio de igualdad de voto equipara a todos los inscritos.”*<sup>86</sup>

Se debe de indicar que, en gran variedad de Reglamentos, se han establecido subdivisiones de los registros básicos y ello justificado en datos objetivos y en rasgos diferenciados. Que permite establecer una nueva subdivisión. Un ejemplo de ello puede ser la creación de subregistros dentro de los registros de viñedos con motivo de ciertas características geográficas diferenciadas. Lo cual a su vez produce la existencia de colegios electorales diferenciados. De acuerdo con José Luis García Ruiz, indica que *“es una práctica habitual reservar un numero de vocales del sector producto a los viticultores agrupados en cooperativas. Y por lo que se refiere al sector bodeguero o comercializador, también se recogen subregistros a partir de la posible existencia de diferentes zonas de crianza o de las especificidades de estas puedan tener en cada caso.”*

Finalizando con este epígrafe del trabajo, indicar que los vocales deberán de elegir a un presidente el cual ostentara la representación del consejo y que ejerce las funciones de dirección del mismo. Este puede no ser Vocal y tiene voto dirimente. Además de un Secretario General quien se considera como un cargo técnico y que desarrolla funciones gerenciales de los servicios administrativos y de organización del Consejo. No obstante, este asistirá a las sesiones del Consejo con voz, pero sin embargo no dispondrá de voto.

---

<sup>85</sup> En su artículo: Denominaciones de origen y consejos reguladores. Cuadernos de derecho para ingenieros. Organismos reguladores. Obra ya citada.

<sup>86</sup> El autor además añade: “ Debe advertirse, sin embargo, que este radicalismo democrático introduce un factor de perturbación en un organismo que pretende ser representativo también de intereses económicos y constituye el elemento diferenciador más importante entre la figura española de los Consejos Reguladores y los organismos equivalentes de otros países en los que la representación es de carácter interprofesional, lo que supone la ponderación de los intereses económicos en juego. Esta diferencia ha pretendido justificar por el hecho, ya referido, de que los Consejos Reguladores ejercen determinadas funciones públicas que, en sus homónimos extranjeros, siguen residenciadas en la Administración.



Además, se puede recoger en los Reglamentos la presencia de otras figuras dentro de la composición de los Consejos Reguladores<sup>87</sup>. En primer lugar, se puede encontrar la figura del vicepresidente, para que este pueda sustituir al presidente en los casos de ausencia o enfermedad. Indicar que, en ambos casos, tanto los presidentes como vicepresidentes son nombrados formalmente para el cargo por Orden Ministerial o de la Consejería autonómica respectiva. Por último, indicar que la propia naturaleza jurídica de los Consejos Reguladores (Administraciones corporativas) se ve respaldada por la presencia en el pleno de un representante de la Administración competente.

## 2.4. Funciones de los Consejos Reguladores.

Con respecto a las funciones y fines de los consejos reguladores, se encuentran regulados en su contenido mínimo en la Ley 6/2015, de 12 de mayo. Concretamente en su artículo 16. Indicar que estas pueden ser ampliadas en cada Reglamento respectivo.

### Artículo 16 Funciones

*“Serán funciones de las entidades de gestión, con carácter indicativo y no exhaustivo, las siguientes:*

*a) La promoción y la defensa del producto protegido, así como procurar una exhaustiva protección del nombre amparado por la DOP o IGP, registrando a tal fin las correspondientes marcas, nombres de dominios de internet y otros derechos de propiedad industrial que puedan complementar la protección prevista por la legislación en esta materia.*

*Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre protegido por la DOP o IGP frente a su utilización ilegítima que constituyan actos de competencia desleal u otros usos indebidos.*

*b) Proponer las modificaciones del pliego de condiciones al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*

---

<sup>87</sup> Como en el caso del Consejo Regulador de la denominación de origen calificada Rioja. En el que, al margen de otras figuras, se encuentra el Letrado del Consejo.

*c) Llevar los registros de carácter interno exigidos por las normas técnicas de cada entidad, así como colaborar con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el mantenimiento de los registros oficiales relacionados con la DOP o IGP.*

*d) Colaborar con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y órganos competentes de las comunidades autónomas, en particular, en sus actuaciones de control oficial.*

*e) Con independencia de las denuncias que se puedan presentar ante otras autoridades administrativas u órganos judiciales, denunciar ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prácticas no conformes a lo establecido en el pliego de condiciones y en la normativa legal vigente relacionada con el ámbito de aplicación de la presente ley, con independencia de las denuncias que se puedan presentar ante otras autoridades administrativas u órganos judiciales.*

*f) Calificar cada añada o cosecha en el caso de las DOP o IGP de vinos.*

*g) Aplicar unos estatutos que obliguen a sus miembros, entre otros, a lo siguiente:*

*1.º A aplicar las normas adoptadas por la entidad de gestión en materia de: notificación de la producción, comercialización y protección del medio ambiente;*

*2.º A facilitar la información solicitada por la entidad de gestión con fines estadísticos y seguimiento de la producción y comercialización;*

*3.º A someterse al régimen de control interno que, en su caso, estatutariamente se establezca;*

*4.º A responder de los incumplimientos de las obligaciones previstas en los estatutos, así como facilitar la supervisión de su cumplimiento; y*

*5.º A remitir las declaraciones o informes a que estén obligados.*

*Las anteriores funciones habrán de realizarse de acuerdo con la normativa nacional y europea, y en ningún caso se deberá facilitar o dar lugar a conductas contrarias a la competencia incompatibles con los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.”*

Una vez expuestas las funciones recogidas por la ley 6/2015, podemos sintetizarlas en tres grupos diferenciados, centrándonos en los Consejos Reguladores Vitivinícolas.

#### 2.4.1. Gestión de la Denominación de Origen.

El hecho de que un producto se encuentre amparado o pertenezca a una denominación de origen, conlleva que se haya establecido una cadena de producción. Desde que se encuentra en la viña <sup>88</sup> hasta que llega a manos del consumidor final. Por ello es necesario que se aplique o establezca un sistema registro y supervisiones para tratar de garantizar en todo caso la calidad del producto.

Si nos centramos únicamente en las funciones de los consejos reguladores vitivinícolas, podemos afirmar que, dentro del ámbito de gestión, se encuentran dos grandes grupos<sup>89</sup>.

##### **2.4.1.A. Gestión del Registro de Viñas y obtención del vino del año.**

En primer lugar, se encuentra el Registro de Viñas. Es un sistema en el que se recoge y determina la propia extensión del territorio de la viña, que está amparado bajo una denominación de origen. Y es un requisito indispensable para que el fruto pueda ser calificado como apto para la elaboración del producto. En ocasiones se suele subdividir ese registro en función de zonas que poseen características físicas diferenciadoras (ya sea sus propiedades químicas de los compuestos de la tierra, su situación o características climatológicas especiales)

Otra de las cuestiones a tener en cuenta, es la referente a los tipos de uva utilizados, así como a la densidad máxima de plantación. De forma que se pueda detectar la existencia de una sobreproducción de viña no autorizada y que pueda generar producciones fraudulentas. También cobra relevancia los métodos usados a la hora de los cultivos, por norma general están previstas en el

---

<sup>88</sup> O en el campo en caso de ser un producto agrícola.

<sup>89</sup> Esa es la separación que realiza José Luis García Ruiz. Obra ya citada.

reglamento correspondiente las permitidas, que pueden afectar a la propia calidad del producto<sup>90</sup>.

El inicio de la vendimia es uno de los momentos más significativos de la fase inicial de producción de una denominación de origen. Por ello cada año se suele adoptar las denominadas como “normas de campaña”, que son adoptadas por el Pleno del Consejo. Tienen la obligación de ser acordes con el reglamento establecido, no obstante, tienen cierto nivel de discrecionalidad para poder amoldarse a las circunstancias de cada momento, y haciendo uso de los márgenes permitidos en el reglamento. Ello afecta a la propia determinación e inspección de los lagares autorizados a molturar la uva, parámetros químicos que debe contener la uva para poder ser vendimiada, la forma de transportarla y recogerla. En resumen, se trata de asegurar la calidad de la uva recogida, y que toda la cosecha obtenida tenga la garantía del origen.

#### ***2.4.1.B. Gestión de Registro de Bodegas y crianza y expedición de los vinos.***

Este registro, ya lo hemos nombrado anteriormente, se encarga de determinar que bodegas crían y comercializan vinos de la denominación de origen. También del volumen de vino que cada operador tiene en cada momento en crianza o envejecimiento además del volumen que cada uno pone en el mercado. El objetivo principal es el de controlar las entradas y salidas de vino que se producen en cada bodega, para evitar de esa forma la mezcla con vinos que no pertenezcan a la denominación de origen.

Al igual que en el registro de viñas, este puede contener a su vez subgrupos o subregistros para poder distinguir zonas de crianza, o en función de la clasificación de los vinos. (crianza, reserva...)

Las bodegas suelen ser objeto de controles e intervenciones periódicas, para comprobar el número de producción que tienen así como sus mercaderías existentes. Para ello se suele utilizar la numeración del producto, de forma que se asegura la garantía. Al día de hoy, los usos de sistemas informáticos facilitan considerablemente esta cuestión. Por ello mediante el registro de bodegas, se

---

<sup>90</sup> Un ejemplo claro son los sistemas permitidos de poda.

trata de asegurar el fiel reflejo documental de los vinos comercializados bajo el amparo de la denominación de origen.

#### 2.4.2. La defensa y promoción de la Denominación de Origen.

En el primer párrafo del artículo 16 de la ley 6/2015, ya se recoge esta función atribuida a los consejos reguladores. Con ello lo que se busca es que sean los propios consejos los encargados de llevar a cabo la defensa de la denominación de origen tanto en el plano nacional como internacional<sup>91</sup>. Y de la misma manera ejercitando acciones judiciales de defensa de la denominación de origen contra los intrusismos, así como los usos ilegítimos del nombre de la denominación de origen o posibles imitaciones. Además, otra de las formas de defensa, pero en nivel interno, es la de descalificación de aquellos vinos o productores que en un principio estaban amparados por la denominación de origen, pero que posteriormente ha podido desvirtuarse o llevar a cabo prácticas irregulares.

Con respecto a la promoción, no solo hay que hacer referencia a los sistemas de publicidad y marketing que se puedan desarrollar<sup>92</sup>. Sino también la propia imagen que transmite la denominación de origen al público. La puesta en conocimiento de los sistemas de gestión y control de los consejos reguladores hacia los productos bajo el amparo de una denominación de origen produce una reputación y promoción sobre la calidad de los productos.

---

<sup>91</sup> Ya hemos hecho alusión a la posibilidad de inscribir la denominación de origen en diferentes registros nacionales e internacionales de marcas.

<sup>92</sup> Algunos consejos reguladores incluyen un departamento de marketing y publicidad dentro de su composición.

### 2.4.3. El control de la denominación de Origen.

Ya hemos expuesto anteriormente el nuevo sistema de control establecido en la ley 6/2015. No obstante, creo necesario indicar el contexto de esta nueva regulación.

En primer lugar hay que manifestar que de nada sirve otorgar esas funciones a los propios consejos reguladores, si finalmente no hay ningún sistema que permita controlar el cumplimiento. En otras palabras, se podrían llegar a quedar en papel mojado.

En un principio, esas labores de control se venían ejerciendo directamente por los propios consejos reguladores<sup>93</sup>. Y todo ello mediante un sistema de tutela administrativa, puesto que todas las decisiones estaban sometidas a la superior decisión en alzada de la autoridad administrativa competente<sup>94</sup>. Fue a través de la ley 24/2003, de 10 de abril, que debido al pretexto de que los consejos reguladores no pueden ser juez y parte, altero el sistema establecido desde la década de 1930.

Agustín González González<sup>95</sup> en su tesis doctoral indica:

*“Esta acumulación de funciones en manos de los Consejos Reguladores estuvo en el origen de muchas quejas sobre supuesta negligencia e incluso arbitrariedades en la forma en que los Consejos Reguladores aplicaron estas reglas. En este sentido, resulta muy revelador el contenido de la Sentencia del TS de 16 de abril de 2002 178 en la que se cuestionaba la idoneidad e imparcialidad de los técnicos designados por el comité de calificación para el examen organoléptico-sensorial de una partida de vinos sometida al proceso de calificación y cuyo resultado fue la no calificación. El TS rechaza este argumento afirmando lo siguiente:*

*Los expertos catadores, no puede estimarse que sean juez y parte, como el recurrente meramente refiere, pues aparte de que en el*

---

<sup>93</sup> Y era ahí donde se concentraban mayoritariamente las funciones públicas que desarrollaban.

<sup>94</sup> Ya fuera el propio Ministerio o Consejerías de Agricultura.

<sup>95</sup> GONZÁLEZ GONZÁLEZ A. “El control de las administraciones públicas en el sector vitivinícola: el papel de los consejos reguladores.” Año 2014. Pag 90-105.

proceso de nombramiento puedan los afectados intervenir e impugnar el nombramiento de los catadores, cuando no esté suficientemente acreditado el carácter de expertos, o existen dudas fundadas sobre el conocimiento que puedan tener de las distintas clases de vinos, según provengan de La Rioja, Alta, Baja, Álava o Navarra, no hay que olvidar, que al ser anónima la degustación, ignoran a que vino o partida se refiere su actuación, y por tanto son ajenos a los intereses afectados, aparte de que no hacen otra cosa que cumplir con el cometido asignado por la norma; c) por otro lado, porque el hecho de que las decisiones, las hayan de tomar los expertos catadores por mayoría, y el que estén previstas distintas catas, garantiza y motiva suficientemente la solución final, máxime cuando en el caso de autos, el vino fue objeto de cata hasta por once personas distintas y en lo esencial, como refiere la sentencia recurrida, hubo coincidencia; d) y en fin, porque no adquiere trascendencia el hecho de que respecto al examen sensorial del vino, no se aplique lo dispuesto en el Real Decreto 1945/83, sobre el análisis inicial, contradictorio y dirimente, que si se puede aplicar para el análisis químico del vino, pues dada la naturaleza y objeto de tal examen sensorial, -valorar el olor, color y sabor-, es claro, que la valoración de tales circunstancias y datos, no puede quedar al arbitrio o estimación de cualquier perito, y si a los peritos o expertos catadores, designados tras el oportuno proceso de selección, por el Consejo Regulador, que es quien tiene encomendado, el velar por la calidad y por el prestigio del vino, en beneficio de los afectados, de las distintas subzonas, sin olvidar, por un lado, que dada la voluntariedad de la inscripción en los Registros correspondientes, entre otros, artículo 26 de la Orden de 3 de abril de 1.991, el solo hecho de la inscripción significa la aceptación de las condiciones y proceso establecido, y por otro, que las distintas y variadas catas al efecto establecidas permiten, la revisión del primer análisis sensorial, con las mismas garantías, del análisis contradictorio, a que se refiere el R.D. 1945/83, aunque obviamente a cargo del órgano al efecto dispuesto, los expertos catadores, que por razón de su nombramiento, y de las condiciones y competencia reconocidos,

*gozan en sus valoraciones de discrecionalidad técnica, y son los únicos que pueden emitir el dictamen final, aunque obviamente su decisión se pueda revisar, a pesar de esa discrecionalidad técnica por las vías que autoriza la jurisprudencia reiterada de esta Sala, para tales supuestos, sentencias de 7 de diciembre de 1.983, 28 de noviembre de 1.984, 28 de febrero de 1.995, 2 de septiembre de 1.986, 3 de febrero de 1.987, 5 de noviembre de 1.990, 5 de julio de 1.993 y 27 de octubre de 1.998, que no es el procedimiento aquí seguido.*

*Lo cierto es que la propia experiencia de la vida es la que se ha encargado de demostrar que una organización en la que los órganos de control dependen de las mismas instancias que velan por los intereses económicos de los agentes controlados no es la más adecuada para garantizar la objetividad en la aplicación de las normas. Los críticos con el modelo de control que amparaba la legislación derogada por la Ley 24/2003 denunciaron reiteradamente que la organización de la Denominación de Origen española había servido para dar el visto bueno a enormes masas de vino mediocre producido por las mismas grandes bodegas que dominan los Consejos Reguladores.<sup>96</sup>*

En la actualidad, tenemos diferentes niveles o tipos de control. En primer lugar, nos encontramos con el control oficial. Este fue introducido por la propia ley 24/2003, y se desarrollaba por el propio ministerio o los órganos delegados. No obstante, y debido a que la competencia en materia de agricultura es autonómica, algunas de las comunidades autónomas han producido legislación propia. Esta legislación autonómica resulta ser divergente entre sí, mientras que algunas comunidades autónomas siguieron con la orientación o corriente estatal<sup>97</sup>, otras mantuvieron los rasgos del sistema anterior.

En el ámbito de denominaciones de origen supra autonómicas, la ley 6/2015 establece en su articulado que el control oficial de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas es competencia del Ministerio de

---

<sup>96</sup> GONZÁLEZ GONZÁLEZ A. "El control de las administraciones públicas en el sector vitivinícola: el papel de los consejos reguladores." Año 2014.

<sup>97</sup> Por norma general, las autoridades autonómicas de agricultura son más proclives a su intervencionismo directo que dotar de estas competencias a los consejos reguladores. No obstante, esto también tiene una consideración negativa, puesto que el control se encuentra más alejado del lugar de producción.



Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero que a su vez el propio ministerio podrá *“delegar determinadas tareas de control (relacionadas con la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones) a varios organismos de control que actúen como organismos de certificación de producto”* y que además *“los organismos de control que actúen como organismos de certificación de producto deberán estar acreditados de conformidad con la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 o norma que la sustituya<sup>98</sup>. En tanto obtienen la acreditación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá conceder autorizaciones provisionales de doce meses para tales organismos.”*

En segundo lugar, también se encuentra el control interno de las entidades de gestión. En este caso nos referimos a los sistemas de control de los consejos reguladores. Encontramos su regulación en el artículo 24 de la ley 6/2015 en el que indica: *“Las entidades de gestión podrán establecer en sus estatutos un sistema de control interno destinado al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los operadores, incluidas en el pliego de condiciones.”<sup>99</sup>* Cabe destacar este artículo por la importancia que aporta el

---

<sup>98</sup>En el Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, en su artículo 7, se establece los requisitos para la delegación: *La delegación sólo podrá efectuarse sobre un organismo de control que cumpla, además, los siguientes requisitos:*

- a) poseer la experiencia, los equipos y la infraestructura necesarios para realizar las tareas que le han sido delegadas,*
- b) contar con personal suficiente y con la cualificación y experiencia adecuadas,*
- c) ser imparcial y no tener ningún conflicto de intereses en lo que respecta al ejercicio de las tareas que le han sido delegadas.*

*Dicha delegación se aprobará mediante resolución del Director General de la Industria Alimentaria para cada DOP e IGP supraautonómicas.*

<sup>99</sup> Continúa diciendo:

*“Cuando la entidad de gestión esté constituida como corporación de derecho público los informes derivados de la aplicación del sistema de control interno, relativos al incumplimiento del pliego de condiciones por parte de algún operador, podrán tener la consideración de solicitud de iniciación de procedimiento sancionador a petición razonada de otro órgano, previsto en el artículo 69, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, la programación anual del control interno aplicado deberá ser aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*

*3. Adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, cuando la entidad de gestión esté constituida como corporación de derecho público, los hechos relativos al incumplimiento del pliego de condiciones por parte de algún operador constatados por el personal de la estructura encargada del control interno tendrán presunción de certeza y constituirán prueba documental pública a efectos de su valoración en el procedimiento sancionador sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses pueda señalar o aportar el interesado. A tal efecto la estructura deberá estar acreditada de conformidad con la norma UNE-EN ISO/IEC 17020/2012 y comunicará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con regularidad y siempre que éste lo pida, los resultados de los controles llevados a cabo. Si los resultados de los controles revelan o hacen sospechar un incumplimiento, la estructura informará inmediatamente de ello a la autoridad competente.*

hecho de que el consejo regulador está constituido como administración corporativa. Debido a que cambian sus competencias, y el rango que se le da a las resoluciones del consejo regulador.

En el caso de que se traten de denominaciones de origen que se extiendan en una sola comunidad autónoma, y sea competencia asumida por ella, se deberá atender a la regulación específica sobre el control y competencias de los consejos reguladores, como ya hemos indicado anteriormente.

Pero fue mediante el Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo<sup>100</sup>, donde se desarrolló el control interno de las entidades de gestión (de los consejos reguladores). Donde se establece las obligaciones de los consejos, a la hora de establecer sus controles (sobre todo se refiere a las comunicaciones al Ministerio).

Por último, se establece un sistema de autocontrol por parte de los propios operadores, quienes debe de cumplir una serie de indicaciones<sup>101</sup>. Entre las que destacan la obligación de establecer un sistema documental para sintetizar la información acerca de los productos, así como un deber de conservación de la información por un periodo de 5 años.

---

*4. Corresponderá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la supervisión de la aplicación del sistema de control interno por parte de las entidades de gestión.*

*El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá retirar la presunción de certeza y consideración de prueba documental pública, prevista en el apartado tercero del presente artículo, si los resultados de una auditoría o de una inspección revelan que la estructura encargada del control interno no lo está realizando adecuadamente. Se retirará sin demora si la estructura encargada del control interno no toma medidas correctoras adecuadas y oportunas.”*

<sup>100</sup> Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

<sup>101</sup> Literalmente el artículo de la ley 6/2015 afirma:

*Autocontrol*

*1. Los operadores, en todas y cada una de las etapas de producción y elaboración deberán establecer un sistema documentado de autocontrol de las operaciones del proceso productivo que se realicen bajo su responsabilidad, con el fin de cumplir lo establecido en la legislación específica correspondiente y asegurar el cumplimiento del pliego de condiciones de los productos, así como cualquier otra disposición que le sea de aplicación.*

*2. Los operadores deberán conservar la documentación referida al autocontrol durante un período mínimo de cinco años, debiendo ampliarse en función de la vida útil del producto.*

*3. Las entidades de gestión podrán establecer, en el marco del control interno, sistemas de consultoría y asesoramiento orientados a facilitar a los operadores el cumplimiento del pliego de condiciones de un producto.*

## 2.5. Personal de los Consejos Reguladores.

Ya hemos indicado cuales son las funciones de los consejos reguladores, al igual que su composición. Pero ello no se puede desarrollar ni cumplir sin personal contratado. Y es aquí donde surge una nueva cuestión, acerca del régimen jurídico del personal.

En primer lugar, anunciar que tanto en la normativa anterior<sup>102</sup> como en la normativa actual<sup>103</sup> no hay referencia alguna con respecto a esta cuestión. No obstante, hay que indicar que aquellos órganos gestores que no ostentan la condición o naturaleza de administración corporativa no producen confusión o conflicto alguno, puesto que al ser entes privados no están relacionados con el personal laboral del Estado.

Agustín González González<sup>104</sup>, realiza una recopilación de varios autores que se pronuncia acerca de este aspecto. Concretamente establece:

*“LÓPEZ BENÍTEZ<sup>105</sup> considera que hubiera sido deseable una solución legislativa para el señalamiento del régimen laboral de este personal al servicio de los Consejos Reguladores, más aun a la vista de la distinta suerte seguida por otros colectivos similares en situaciones semejantes. En efecto, como recuerda PINO TARRAGONA<sup>106</sup>, nuestro derecho administrativo ha conocido “casos de conversión de órganos administrativos en Entes Públicos —como sucedió, por ejemplo, en puertos— o en sociedades públicas —caso de Correos—. Conoce también supuestos de extinción ex lege de Corporaciones de Derecho Público (Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad Urbana) con simultánea absorción de este personal por la Administración Pública; pero*

---

<sup>102</sup> Ley 24/2003, de 10 de abril “de la Viña y el Vino”.

<sup>103</sup> Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico.

<sup>104</sup> AGUSTÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. “El control de las administraciones públicas en el sector vitivinícola: el papel de los consejos reguladores.” Año 2014.

<sup>105</sup> LÓPEZ BENÍTEZ, M. Revista Jurídica de Castilla y León nº 9, mayo 2006 Pág. 25 Algunas anotaciones sobre la LVV de Castilla y León

<sup>106</sup> PINO TARRAGONA, G. Público y privado en el modelo organizativo de la DOC Rioja. Problemática jurídica. Anales del Convenio Universidad de la Rioja- Parlamento de la Rioja 2005,

*el fenómeno que aquí se opera es cualitativamente distinto y hubiera merecido —y merece, desde luego— una solución legal.”*

Tampoco hay una regulación concretamente dentro de la normativa autonómica, salvo con alguna excepción<sup>107</sup>. Con lo que este ámbito se ha quedado un tanto “desierto” en cuanto a su regulación se refiere. No obstante, como ya hemos mencionado, se ha comenzado a establecer mediante los decretos que aprueban los estatutos de los consejos reguladores. En este aspecto destaca el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada «Rioja» y de su Consejo Regulador. Concretamente en su artículo 2:

*“Se regirá por el derecho privado y en el ejercicio de potestades o funciones públicas, por el Derecho Administrativo. Se exceptúan las cuestiones de índole civil y penal que quedan sometidas al régimen jurídico correspondiente, así como las relaciones con su personal, que se regirán por la legislación laboral.”*

De esta forma se arroja luz al tema objeto de conflicto. Determinado que la regulación del personal laboral se desarrollara mediante la legislación laboral y no serán considerados como personal de la administración. No obstante, de acuerdo con los autores expuestos, me inclino a que esta área debería de haber estado regulada mediante la ley 6/2015, u otra normativa aplicable (comunidades autónomas) que no dejaran lugar a posibles dudas.

---

<sup>107</sup> “Castilla y León se limita en el Art. 25.4 a especificar que éstos pueden contratar en régimen laboral al personal necesario para su funcionamiento, «que en ningún caso tendrá la consideración de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León».”

## 2.6. La Potestad Sancionadora.

En un principio, en la propia normativa preconstitucional, estableció que los propios Consejos Reguladores tenían atribuida el ejercicio y desarrollo de la potestad sancionadora. Concretamente fue en el artículo 93 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes<sup>108</sup>, donde se recogía esa posibilidad. No obstante, fue en el Reglamento que desarrollo la mencionada ley<sup>109</sup> donde se estableció claramente esta posibilidad, concretamente en su artículo 94<sup>110</sup>, y en su artículo 129.2<sup>111</sup> donde se recoge que los Consejos Reguladores especificaran las sanciones y las infracciones.

Posteriormente, con la llegada de la Constitución de 1978, se implanto el principio de legalidad recogido en el artículo 25.1<sup>112</sup>. Ello supuso, como veremos a continuación, que los Consejos Reguladores no podían basar su potestad sancionadora en dicha normativa.

---

<sup>108</sup> "Artículo noventa y tres.

*Uno. Las infracciones en materia de Denominaciones de Origen podrán ser sancionadas con apercibimiento, multa, decomiso, suspensión temporal de uso de la Denominación o baja del infractor en los Registros de ésta.*

*Dos. El Reglamento para la aplicación de esta Ley tipificará las infracciones y graduará las sanciones, sin que puedan exceder de las determinadas en el título V."*

<sup>109</sup> Reglamento del Vino, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo.

<sup>110</sup> "Artículo 94:

*1º- Los Consejos Reguladores acordaran la incoación e instrucción de los expedientes para sancionar las infracciones en materia de denominación de origen cometidas por personas inscritas en sus Registros.*

*2º- La resolución de los expedientes incoados en el primer supuesto corresponderá al propio Consejo cuando la sanción no exceda de 50.000 pesetas."*

<sup>111</sup> "Artículo 129.2:

*Los Reglamentos de cada denominación de origen especificaran las sanciones a aplicar a las infracciones de su Reglamento por los inscritos en los Registros de la misma, clasificando estas en:*

*A) Faltas administrativas, que se sancionaran en la forma y cuantía que establece el artículo 120 de este Reglamento, y las que sean de carácter leve, con censura.*

*B) Infracciones a lo establecido en su Reglamento sobre la elaboración y características de los productos amparados, que sancionarán en la forma y cuantía establecida en el artículo 126, apartado 2, y con su decomiso,*

*C) Uso indebido de la denominación otros que puedan causarle perjuicio o desprestigio. que se sancionaran en la forma y cuantía que establece el apartado 1 de este artículo.*

*D) En los casos de infracciones graves, además de las sanciones establecidas en los apartados b) y c), podrá aplicar al infractor la suspensión temporal de uso de la denominación o la baja en los Registros de la misma."*

<sup>112</sup> "Artículo 25:

*1º-Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento."*

La autora Glikeya Pino Tarragona<sup>113</sup> afirma que:

*“El sistema se basa en una doble remisión deslegalizadora y ha sido declarado en su mayor parte contrario al principio de legalidad por el Tribunal Constitucional. La disposición adicional única de la Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, se remitía, en cuanto al régimen sancionador, a la Orden de 3 de abril de 1991, que ha sido declarada nula, por lo que no cabe considerarla vigente tampoco en cuanto al régimen sancionador, ya que el sistema de infracciones y sanciones previsto en la Ley de la Viña y el Vino resulta suficiente y directamente aplicable y la titularidad de la potestad sancionadora corresponde a la Administración General del Estado o a un órgano de las CCAA.”*

Posteriormente y de acuerdo con lo expresado por la autora, tras la entrada en vigor de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, supuso un gran cambio normativo. En primer lugar, se produjo la derogación de toda normativa anterior (concretamente dispone en su disposición adicional primera la derogación de la Ley de 1970), normativa que permitía la potestad sancionadora a los propios Consejos Reguladores.

En segundo lugar, con la entrada en vigor de la mencionada ley, se establece una separación entre las funciones sancionadoras y las de gestión/control. De forma que se establece las diversas funciones ostentadas por los órganos de gestión (Consejos Reguladores). Pero también establece quien será competente para sancionar. Así lo establece el artículo 36 de la Ley 24/2003:

*Corresponde la titularidad de la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en esta ley:*

*a) A la Administración General del Estado, en el caso de infracciones relativas a los niveles de protección cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma.*

---

<sup>113</sup>PINO TARRAGONA G. en su artículo: Público y privado en el modelo organizativo de la denominación de origen calificada “Rioja”. Problemática jurídica. Pag. 142. Anales del Convenio Universidad de La Rioja - Parlamento de la Rioja. 2004

b) Al órgano competente de la Administración de la comunidad autónoma correspondiente, en los demás casos.<sup>114</sup>

Tras esa modificación, surgieron variedad de conflictos. Por ejemplo, en el caso del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Tras la declaración de nulidad de la Orden de 3 de abril de 1991, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada «Rioja» por parte del Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de julio de 2004<sup>115</sup>. Se aprobó un nuevo Reglamento que como afirma Glikeya Pino Tarragona tenía un carácter provisional. Textualmente afirma:

*“El fallo de esta sentencia conlleva un vacío legal para la Denominación, pues con la anulación de la norma de 1991 resultaría de nuevo vigente la Orden de 2 de junio de 1976, de tal manera que las diferencias en la zona de producción, las densidades de plantación e incluso el otorgamiento del carácter de calificada, disposiciones contenidas en la Orden de 1991, no podrían aplicarse ahora, con la inseguridad jurídica que ello supone. Por ello, dada la trascendencia de este pronunciamiento del TS, el Consejo Regulador puso el asunto en conocimiento del Ministerio de Agricultura y se decidió aprobar un nuevo Reglamento de la Denominación por Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, que cubre el vacío legal dejado por el TS, pero que está dotado de la nota de provisionalidad, a la vista de la necesidad de proceder a la definitiva adaptación del mismo a la Ley estatal de la viña y el vino.”*

Con la creación del nuevo reglamento<sup>116</sup>, se preveía que la potestad sancionadora iba a continuar regulada en los mismos términos que hasta la

---

<sup>114</sup> Artículo 36, Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

<sup>115</sup> Tal y como indica PINO TARRAGONA, G. en su obra ya citada:

*“STS de 10 de julio de 2004, ponente D. Antonio Martí García, en la que se pronuncia en casación sobre el recurso interpuesto el 6 de junio de 1991 por la Agrupación de Artesano-Bodegueros de Rioja contra la Orden del MAPA de 3 de abril de 1991, en el sentido de estimar el recurso de casación por falta del Dictamen del Consejo de Estado a que se refiere el artículo 22.3 de la Ley 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, dictamen que era exigido al tratarse de una disposición general que desarrollaba la Ley 25/1970.(...)”*

*(...) De esta manera, cuando se omite el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, ello constituye un vicio de nulidad de pleno Derecho, al entenderse que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 62.1.e) Ley 30/1992).”*

<sup>116</sup> Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre.

fecha, pero debido a la Sentencia 52/2003, de 17 de marzo del Tribunal Constitucional, vino obligando a no establecer regulación acerca de la potestad sancionadora. Esta sentencia afirmó con rotundidad:

*“Este panorama descubre que las normas sancionadoras del Reglamento del Rioja prolongan, revitalizando hasta la actualidad, otros preceptos cuya pervivencia en el ordenamiento constitucional se justificaba en necesidades de continuidad del ordenamiento, apoyadas en el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Necesidades que, si por un lado han de ponderarse restrictivamente en todo caso, como supuesto limitativo que son de un derecho fundamental, por el otro se ven matizadas progresivamente conforme avanzamos en nuestro tiempo, el de la vigencia de la Constitución. Posterior a la de ésta, el art. 51.1.7 del Reglamento del Rioja hace perdurar en el presente un sistema de producción de normas sancionadoras contrario al art. 25.1 CE. De ahí que, conforme a la doctrina más arriba expuesta, tengamos que concluir que dicho precepto reglamentario carece de fundamento de legalidad mínimo en el que la Administración pueda justificar constitucionalmente el ejercicio de su potestad sancionadora.”*

Por lo que termino fallando:

*“Comprobada la anterior infracción constitucional, debe otorgarse a la demandante el amparo del derecho fundamental que le reconoce el art. 25.1 CE, pues fue sancionada por la comisión de una infracción reglamentaria carente de cobertura legal. Por lo que deben anularse tanto la Resolución del Consejo de Ministros que sancionó a la demandante como la Sentencia que la confirmó, pues lesionaron el derecho de la demandante a la legalidad sancionadora.”*

Además de este fallo, el Consejo de Estado se pronunció en esta materia, reafirmando:

*“... la Ley de la Viña y el Vino parte de un principio claro: la diferencia entre la Administración y el órgano de gestión, en este caso Consejo Regulador, que se manifiesta en que a tenor de su artículo 36 la titularidad de la potestad sancionadora corresponde a la Administración General del*



*Estado o al órgano correspondiente de la Administración de las Comunidades Autónomas, mientras que los órganos de gestión velarán por el cumplimiento del reglamento del v.c.p.r.d<sup>117</sup>. pudiendo denunciar cualquier uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes (...) Esta previsión no les atribuye competencia sancionadora, por lo que la atribución de competencias en materia de iniciación, incoación e instrucción de expedientes sancionadores no se compadece con los principios de la Ley de la Viña y el Vino.”<sup>118</sup>*

A pesar de que en el propio Reglamento no se estableció la potestad sancionadora del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el propio Consejo continuó ejerciendo su potestad sancionadora. Lo cual ha provocado una serie de pronunciamientos jurisprudenciales que llegan a seguir corrientes doctrinales diferentes.

Siguiendo a la profesora Glikeya Pino Tarragona podemos sintetizar los pronunciamientos y corrientes que hubo. Dividiéndolas fundamentalmente en dos:

*“A favor de dicha opción se arguye que, si bien es cierto que la titularidad de la potestad sancionadora la ostenta la Administración General del Estado, no es menos cierto que el artículo 35 de la Orden APA/3465/2004 define al Consejo como un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y dicha desconcentración puede tener su sustrato en el Decreto 835/1972, que debe considerarse vigente en tanto no se desarrolle la Ley 24/2003 tras la actualización de sus cuantías por el RD 322/2000, de 3 de marzo.”<sup>119</sup> Según esta postura, el Decreto*

---

<sup>117</sup> Vino de calidad producido en región determinada Denominación de Origen.

<sup>118</sup> Dictamen 2162/2004 (Agricultura, Pesca y Alimentación), del Consejo de Estado.

<sup>119</sup> “En esta normativa se dispuso que los procedimientos sancionadores, en los casos en que fuera competente la Administración General del Estado, serían resueltos por: a) el órgano competente para acordar su iniciación, cuando la cuantía total de las sanciones propuestas por el instructor del procedimiento no fuese superior a 500.000 pesetas (3.005’06 €), b) el Director General de Alimentación, cuando dicha cuantía excediera de 500.000 pesetas y no superara los 10.000.000 pesetas (6.101’21 €), c) el Secretario General de Agricultura y Alimentación, cuando dicha cuantía excedía de 10.000.000 pesetas y no superaba los 50.000.000 pesetas (300.506’05 €), d) El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando dicha cuantía excedía de 50.000.000 pesetas y no superaba los 100.000.000 pesetas (601.012’10

*835/1972 no ha sido derogado expresamente por la Ley 24/2003, cosa que sí ha hecho con el Estatuto del Vino de 1970,<sup>59</sup> por lo que la redacción del artículo 94 del Decreto 835/1972, seguiría vigente, estableciendo que «los Consejos Reguladores acordarán la incoación e instrucción de los expedientes para sancionar las infracciones en materia de denominaciones de origen cometidas por personas inscritas en Registros.*

*Abonando esta postura encontramos la Sentencia 444/2006 del Juzgado Central de lo Contencioso – Administrativo número 5; la Sentencia 459/2007 del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 1 de Logroño y diversos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en las que se confirman las sanciones impuestas por el Consejo Regulador. Por el contrario, en el otro lado de la balanza también se han emitido pronunciamientos, representados principalmente por las Sentencias 48/2008, de 22 de febrero, y 49/2009, de 2 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 1 de Logroño; así como la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2008, en las que se niegan facultades sancionadoras al Consejo Regulador y se anulan los actos impugnados por concurrir un vicio de nulidad radical cual es la falta de competencia administrativa del órgano que dictó la resolución sancionadora.*

*Estas sentencias se basan en que la pretendida desconcentración en el organismo de gestión no puede encontrar su fundamento en el Decreto 835/1972, pues esta opción obligaría a mantener subsistente un Decreto dictado en ejecución de la Ley 25/1970, que ha sido derogada expresamente por la Ley de la Viña y el Vino. De este modo, además, se mantendría la dualidad en las fases instructora y resolutoria, permitiendo que un mismo órgano instruya y resuelva cuando esta posibilidad no tiene apoyo en la legislación vigente, y quedaría flagrantemente vulnerado el principio según el cual es necesaria una norma con rango de ley para atribuir potestades sancionadoras a los Consejos Reguladores, precisión*

---

€). e) el Consejo de Ministros, cuando dicha cuantía excediera de 100.000.000 pesetas o cuando se propusiera como sanción la suspensión temporal del ejercicio de la empresa.”

*que recuerda el Consejo de Estado en el Dictamen antes mencionado.”*

120

Con la entrada en vigor de la ley 6/2015, no se ha producido ninguna modificación sustancial acerca de esta materia. El motivo principal es que al regular denominaciones de origen que abarcan territorialmente más de una comunidad autónoma, se pretende reforzar la figura del Estado Central. Reservándole a él la potestad sancionadora.

Concretamente en su artículo 38 establece que órganos son competentes en materia sancionadora:

*“Serán competentes para la imposición de sanciones los siguientes órganos en lo que respecta a la DOP o IGP:*

*a) El Director General de la Industria Alimentaria, cuando la cuantía total de la sanción no supere los 150.000,00 euros.*

*b) El Secretario General de Agricultura y Alimentación, cuando dicha cuantía exceda de 150.000,01 euros y no supere los 500.000,00 euros.*

*c) El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando dicha cuantía exceda de 500.000,01 euros y no supere 1.000.000,00 euros.*

*d) El Consejo de Ministros, cuando dicha cuantía exceda de 1.000.000,01 euros.”*

Todo ello puede llegar a debilitar el estatus de administración corporativa que ostentan los Consejos Reguladores, puesto que en otros órganos como los colegios profesionales el régimen sancionador que desarrollan es una pieza clave para la determinación de su naturaleza jurídica.

No obstante, aunque se determine que no tienen competencia sancionadora como tal, sí que está permitido establecer un régimen disciplinario con respecto a los miembros que forman parte del Consejo Regulador. En el caso del Consejo

---

<sup>120</sup> PINO TARRAGONA, G. Obra ya citada. 2004

Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja establece en sus estatutos:

*“Régimen disciplinario*

*Artículo 30. Principios Generales.*

*1. Las personas físicas o jurídicas inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como los miembros integrantes de la entidad de gestión, están sujetos a la responsabilidad derivada del incumplimiento de lo establecido en estos Estatutos.*

*2. En el ejercicio de la potestad disciplinaria se respetarán los criterios de proporcionalidad de la sanción con la gravedad de los hechos y sus consecuencias, así como la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.*

*3. El régimen disciplinario establecido en estos estatutos se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden en que los inscritos y miembros integrantes de la entidad de gestión hayan podido incurrir.*

*4. No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento establecido en el presente capítulo.*

*5. La potestad disciplinaria corresponde al Pleno.”*

Por ello no debe confundirse potestad sancionadora con el régimen disciplinario, puesto que la potestad sancionadora se rige por la normativa administrativa, al ser una prerrogativa de la Administración. Sin embargo, el régimen disciplinario es el propio de cualquier sociedad civil, que, en caso del incumplimiento de alguno de los socios, deberá de responder ante la sociedad. En este caso se aplica y se rige por el derecho civil. Prueba de ello se puede encontrar en el artículo 36<sup>121</sup> de los estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de

---

<sup>121</sup> “Artículo 36:

*1. Para la adopción de las sanciones disciplinarias recogidas en los artículos anteriores se tramitará un expediente disciplinario que permita al inscrito ser informado de los hechos y la falta disciplinaria que se le imputa, participar en el procedimiento para alegar lo que a su defensa convenga y, si mediara después de su tramitación acuerdo imponiendo una sanción, que esté debidamente motivado.*

Origen Calificada Rioja donde establece el procedimiento disciplinario a seguir. Destacando su último párrafo:

*“7. Contra la resolución que ponga fin al expediente, el interesado podrá interponer recurso ante la jurisdicción ordinaria.”*

Por lo que en caso de conflicto o de interponer recurso, se deberá acudir a la jurisdicción civil, como si de una sociedad civil se tratase.

No obstante, todo indica que de cara al futuro los Consejos Reguladores puedan llegar a ostentar competencia en materia sancionadora. Prueba de ello es que anteriormente así era, y que realmente son estos órganos los que desarrollan la parte más práctica con respecto a la defensa de las Denominaciones de Origen. Llegando a producir situaciones en las que los organismos estatales o autonómicos no puedan perseguir o no sean completamente competentes a la hora de sancionar a quienes infrinjan algún daño a las Denominaciones de Origen. Por contraparte debemos indicar que puede existir el riesgo en los que los Consejos Reguladores no persigan esos incumplimientos o infracciones debido a que existan intereses personales u ocultos por parte de los miembros de los Consejos.

En cualquier caso, personalmente opino que lo ideal es una situación intermedia, en la que los Consejos Reguladores tengan potestad sancionadora, pero a su vez se sometan a la vigilancia del Estado. Prueba de que dicho objetivo es viable,

---

*El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio o a instancia de parte, siempre mediante acuerdo del órgano competente.*

*2. El órgano competente del Consejo Regulador, al tener conocimiento de una supuesta infracción disciplinaria, realizará las actuaciones previas precisas al objeto de determinar si existen circunstancias que justifiquen tal iniciación, ordenando en el caso de que no las hubiera el archivo de las actuaciones.*

*3. El Acuerdo de inicio de expediente disciplinario contendrá los siguientes extremos:*

*a) Identificación de la persona inculpada.*

*b) Hechos que motivan la incoación de expediente disciplinario.*

*c) Instructor del procedimiento, con indicación de los supuestos de recusación.*

*d) Indicación del derecho a formular alegaciones y de audiencia.*

*4. Del acuerdo de inicio se dará traslado al interesado por un plazo de quince días hábiles para que alegue lo que a su derecho convenga.*

*5. Oído el interesado y practicadas las pruebas pertinentes, por el Instructor se elevará Propuesta de Resolución al Pleno, que dictará resolución, que habrá de ser motivada y en la que no se podrán aceptar hechos ni fundamentos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta.*

*6. El plazo máximo en que debe dictarse resolución expresa, no podrá exceder de seis meses contados desde la fecha del Acuerdo de inicio.*

*7. Contra la resolución que ponga fin al expediente, el interesado podrá interponer recurso ante la jurisdicción ordinaria.”*

son los Colegios Profesionales. Quienes ostentan competencia en materia sancionadora y ello no conlleva a que se produzcan situaciones en las que primen más los intereses individuales.

## Bibliografía:

*“Las indicaciones geográficas”*, realizada por la Sección de Derecho de Diseños y de Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), integrada por María Paola Rizo, Nathalie Frigant y Violeta Ghetu, bajo la dirección de Marcus Höpperge.

ARIÑO ORTIZ, GASPAR Y SOUVIRON MORENILLA, *“Constitución y Colegios Profesionales.”* Unión Editorial. Año 1984.

CEPEDA MORRAS, J. en su trabajo: *“La Administración Corporativa: Régimen Jurídico y Tipología”* Publicada en la obra Derecho Público y Administración de la Comunidad de Madrid. Año 2008.

ENTRENA CUESTA. *“Curso de derecho administrativo.”* Madrid: Tecnos, 1994.

FANLO LORAS A. en su trabajo: *“El debate sobre colegios profesionales y cámaras oficiales.”* Editorial Civitas. Edición 1992.

FERNADEZ-NOVOA y MAROÑO GARLLANO en su trabajo: *“La regulación de las denominaciones geográficas en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino.”* Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 24, 2003, págs. 283-318.

GARCÍA RUIZ, J.L. en su trabajo: *“Denominaciones de origen y consejos reguladores.”* Cuadernos de derecho para ingenieros. Organismos reguladores. Coordinadora: Carmen Alonso. Editorial La Ley. Año 2009

GARCÍA VIDAL, A. en su artículo: *“La protección de las denominaciones de origen contra los supuestos de evocación.”* Abril 2016.

GARCÍA VIDAL, A. en su artículo: *“La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Ámbito Territorial Supraautonómico”*, Mayo 2015.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ A. *“El control de las administraciones públicas en el sector vitivinícola: el papel de los consejos reguladores.”* Año 2014.

GUILLEM RUIZ, J.V. en su tesis doctoral: *“Condiciones que determinan la calidad de los vinos de la Comunidad Valenciana.”* Año 1999.

LÓPEZ BENÍTEZ, M. “*Algunas anotaciones sobre la LVV de Castilla y León.*” Revista Jurídica de Castilla y León nº 9, mayo 2006 Pág. 25 Año 2004.

LÓPEZ BENÍTEZ, M. “*Las denominaciones de origen.*” Cedecs, Barcelona, 1996.

MAROÑO GARGALLO, M.M. “*Las indicaciones de procedencia y el principio comunitario de libre circulación de mercancías.*” Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XV (1993)

MAROÑO GARGALLO, M.M. “*La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario.*” Marcial Pons, Madrid, 2002.

MILLÁN SALAS, F. “*La denominación de origen: Su protección jurídica.*” Editorial Reus. Año 2012.

MOYA LATORRE, A. en su artículo “*La nueva ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.*” Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015.

PEÑAS MOYANO, B. “*Algunas cuestiones en torno a la denominación de origen como signo distintivo.*” Estudios Jurídicos Agrarios.

PINO TARRAGONA G. en su artículo: “*Público y privado en el modelo organizativo de la denominación de origen calificada “Rioja”. Problemática jurídica.*” Anales del Convenio Universidad de La Rioja - Parlamento de la Rioja. 2004.

PULIDO POLO, M. en su artículo “*Historia jurídica de las indicaciones geográficas: una perspectiva desde la gestión de la comunicación en las instituciones.*” Publicado en junio de 2016.



Anexo nº 1. Etiquetas oficiales de la UE.



## Anexo nº 2.

### PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 2, APARTADO 1

#### I. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

- cerveza,
- chocolate y productos derivados,
- productos de panadería, pastelería, repostería y galletería,
- bebidas a base de extractos de plantas,
- pastas alimenticias,
- sal,
- gomas y resinas naturales,
- pasta de mostaza,
- heno,
- aceites esenciales,
- corcho,
- cochinilla,
- flores y plantas ornamentales,
- algodón,
- lana,
- mimbre,
- lino espadillado,
- cuero,
- pieles,
- plumas.

#### II. Especialidades tradicionales garantizadas

- platos preparados,
- cerveza,
- chocolate y productos derivados,
- productos de panadería, pastelería, repostería y galletería,
- bebidas a base de extractos de plantas,
- pastas alimenticias,
- sal.

**Doctrina Tribunal Constitucional.** <sup>122</sup>

*“Centrándonos en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, nos encontramos en primer lugar con la sentencia núm. 20/1988, de 18 de febrero (se trata de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, contra el artículo 15.2 de la LPA al interpretar que el precepto vulneraba el artículo 9.23 del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 79, en el que se atribuía a la Comunidad Autónoma de Cataluña la competencia exclusiva en materia de “Colegios Profesionales y ejercicio de profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución” No pudiendo profundizar de forma extensa en cuanto a los diversos fundamentos de la sentencia, nos centraremos en el criterio jurisprudencial seguido con respecto a la naturaleza jurídica de las Corporaciones de Derecho Público en general y de los Colegios Profesionales en particular. En la sentencia se afirma: “*

*(...) Como ha declarado este Tribunal en anteriores ocasiones (Ss 76/1983, de 5 de agosto, 23/1983, de 20 de febrero, y 123/1987, de 15 de julio), los Colegios Profesionales son Corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídico-públicas o Corporaciones de Derecho público, cuyo origen, organización y funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados, sino también, y en primer término, de las determinaciones obligatorias del propio legislador, el cual, por lo general, les atribuye asimismo el ejercicio de funciones propias de las Administraciones territoriales o permite a estas últimas recabar la colaboración de aquéllas mediante delegaciones expresas de competencias administrativas, lo cual sitúa a tales corporaciones bajo la dependencia o tutela de las citadas Administraciones territoriales de las funciones o competencias ejercidas*

---

<sup>122</sup> Luis Adrian Gutiérrez Fuentes. La Administración Corporativa. Trabajo final de Grado 2016.

por

aquellas.

*Posteriormente el mismo Tribunal Constitucional ha seguido manteniendo el mismo criterio en sus Sentencias más recientes. Así mismo no niega la existencia del conflicto, al igual que tampoco niega ese carácter “híbrido” de la figura. Destaca la Sentencia núm. 31/2010, de fecha 28 de junio, dictada en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en lo referente a la impugnación del artículo 125 de la Ley Orgánica de reforma, relativo a “Corporaciones de Derecho Público y profesiones tituladas”, afirmó que:*

*(...) las corporaciones de Derecho público, tanto si son representativas de intereses profesionales (Colegios profesionales), como si lo son de intereses económicos (Cámaras de Comercio, Industria y Navegación u otras), tienen la condición de Administraciones públicas de carácter corporativo, es decir, realizan, además de funciones representativas de intereses privados, funciones de carácter público bajo tutela de la Administración (...).*

*Es el propio Tribunal Supremo, quien sintetiza la doctrina emanada por el TC. El cual indica en su sentencia de fecha 14 de julio de 2003 (Fundamento de Derecho Cuarto), lo siguiente:*

*El Tribunal Constitucional ha elaborado su doctrina acerca de la naturaleza de las Corporaciones de Derecho Público, declarando, en síntesis, lo siguiente: A) Las Corporaciones de Derecho Público son propiamente organizaciones de base y fines privados, pero con una dimensión pública por su conexión, también con el interés público y presentan una doble dimensión (sentencia 76/1983, de 5 de agosto. B) En cuanto participan de la naturaleza de las Administraciones Públicas, la competencia del legislador estatal para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones*

*Públicas ex artículo 149.1.18 de la Constitución, alcanza a las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales sentencia antes citada y 18/1984, de 7 de febrero. C) Finalmente en las sentencias 123/1987, de 15 de julio y 113/1994, de 14 de abril, se utiliza, ya directamente, la denominación de Corporación sectorial de base privada.*

*Por todo ello, llegamos a la conclusión de que el Tribunal Constitucional aboga por la naturaleza jurídica pública de las Administraciones Corporativas.*

### **Doctrina Tribunal Supremo.**

*Ya hemos expuesto la corriente doctrinal mayoritaria acerca de la naturaleza jurídica de las Corporaciones, y ello tiene su propia repercusión en la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo. La jurisprudencia ha determinado que nos encontramos ante entidades de naturaleza pública sin que exista inconveniente sobre su base asociativa y sin que ese mismo reconocimiento implique llegar a admitir que pertenecen a la Administración Pública de una forma pura. Ello conlleva el descarte del encuadramiento y consideración de estas entidades como Administración Pública. El TS defiende esta consideración en su Sentencia de fecha 21 de junio de 1983, relativa a las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, donde se afirmó que pese a su cualidad de personas jurídico-públicas, no pueden conceptuarse como entes característicos de la Administración pública por constituir realmente asociaciones de personas para la defensa de sus intereses. Al respecto, se señaló:*

*“Que respecto del tema básico del carácter o no de funcionarios públicos de los Secretarios de las Cámaras de la Propiedad Urbana debe partirse como dato de la naturaleza jurídica que corresponda atribuir a las Cámaras que ser no obstante cualidad de personas jurídico-públicas, no pueden conceptuarse como entes característicos de la Administración pública por constituir realmente asociaciones de personas para la defensa*

*de sus intereses (...); en definitiva se trata de corporaciones oficiales de derecho público, colaboradoras de la Administración pero que no cabe encuadrarlas en ninguno de los tipos de entes de la Administración Pública puesto que el art. 5º A de la Ley de 26 diciembre 1958 las excluye del ámbito de los organismos estatales autónomos.”*

*Otra Sentencia que podemos aportar orientada hacia los Colegios Profesionales es STS 7506/1989 de 19 diciembre. En la cual se indica:*

*“son corporaciones públicas por su personificación y organización, pero que, a pesar de ello, realizan una actividad predominantemente privada; es más, el hecho de que tengan atribuidas algunas funciones públicas no las convierte en Administraciones propiamente dichas, ya que ellas no agotan el contenido de las funciones colegiales pues, en realidad, son facultades añadidas a ellas; es así como se explica que parte de sus actos se hallen sometidos a la jurisdicción contencioso-administrativa, los menos, y el resto a la jurisdicción ordinaria (...) y por ello se encuadran legalmente de la Administración Pública, si bien sólo en su concreta actuación relativa a la representación externa y disciplina interna de la actividad o profesión, estando en lo demás sujetos a las prescripciones del derecho privado; es más, el hecho de que tengan atribuidas algunas funciones públicas, no las convierten en Administración propiamente dicha, ya que ellas no agotan el contenido de las funciones colegiales, pues, en realidad, son facultades añadidas a ellas; es así como se explica que parte de sus actos se hallen sometidos a la jurisdicción contencioso-administrativa, los menos, y el resto a la jurisdicción ordinaria , particular éste al que se refieren las Sentencias de esta Sala de 12 de marzo y 26 de diciembre de 1979, concretando esta última que aunque se encuentran sometidos a la tutela del Estado —y por ello se encuadran legalmente dentro de la Administración Pública, si bien sólo en su concreta actuación relativa a la representación externa y disciplina interna de la actividad o profesión estando en los demás sujetos a las prescripciones del Derecho privado— no forman, en realidad parte del mismo en ninguna de sus esferas (central o periférica); esta situación intermedia hace sea de difícil*

*aplicación al caso la prohibición contenida en el párrafo cuarto apartado a), del art. 28 de la Ley Jurisdiccional, máxime teniendo en cuenta la personalidad jurídica reconocida a cada uno de los Colegios y el existir excepciones que, aunque concretas, no permiten generalizar la prohibición para este tipo de entidades, habida cuenta además, que, como señala la representación del Colegio recurrente, la duda no puede resolverse en sentido restrictivo dado el contenido del art. 24 del texto constitucional, donde se proclama el derecho de todos a tener la tutela electiva de los Tribunales.”*

*Más reciente es la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 1 de febrero de 2011 donde el Alto Tribunal, analizando las Comunidades de Regantes, afirma lo siguiente:*

*“Por ello cabe concluir que las Comunidades de Regantes forman parte de la denominada Administración Corporativa, caracterizados por ser entes dotados de personalidad jurídica a los que la Ley les atribuye la gestión de fines públicos, lo que les convierte en Administraciones Públicas, pero que a la vez que satisfacen los intereses privados de sus miembros, siendo pues de naturaleza mixta pública-privada, al igual que otro tipo de entidades asociativas previstas en nuestro ordenamiento como son los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y las extinguidas Cámaras de la Propiedad Urbana.”*

*Por último, cabe mencionar la Sentencia T.S. de 19 de diciembre de 2011 en la cual se realiza y expone una evolución de la propia jurisprudencia del mismo tribunal, indicando:*

*El Tribunal de instancia ha entendido, aplicando correctamente la doctrina de esta Sala, que el Colegio, como corporación pública de carácter sectorial, tiene confiada la realización de fines públicos, que perfectamente pueden cumplir a través de la organización de que disponen, junto con una faceta privada, según puso de relieve la sentencia de 3 de noviembre de 1988 de esta Sala y reiteró la de 20 de junio de 2000, que expresa que "la naturaleza jurídica y las competencias del*

*colegio pueden resumirse así, en relación con el caso que nos ocupa y conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional: a) son corporaciones de derecho público pero más específicamente como algún revelante sector doctrinal dice, son corporaciones sectoriales de base privada, esto es, corporaciones públicas que, por su composición y organización, realizan una actividad que, en gran parte, es privada aunque tenga atribuidas por Ley o delegadas algunas funciones públicas.... Y constituyen una realidad jurídica de base asociativa régimen particular distinta del de las asociaciones de naturaleza privada. b) el carácter de corporaciones públicas no logra oscurecer la naturaleza privada de sus fines y cometidos principales y su concepción mixta o bifronte, que partiendo de una base asociativa considera a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión pública de los colegios. Además, supone un conjunto normativo estatutario sancionado por el poder público, que permitirá, a la vez, la posibilidad de recursos y la legitimación para interponerlos, tanto por los colegiados como por las personas ajenas al Colegio, pero no ajenas al ejercicio de la profesión. d) la colegiación, máxime siendo obligatoria, no excluye ni puede imposibilitar el ejercicio de los derechos de asociación" (artículo 22 de la Constitución).*

*El fundamento jurídico primero del auto de 26 de octubre de 2006, confirmado por el de fecha 21 de febrero de 2008, con cita de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1990, expresa que "tales colegios, además del cumplimiento de fines privados de interés para los colegiados cumplen otros que son propios de la Administración Pública, para los que se hayan facultados por sus normas reguladoras".;*

*Y es que, como recuerda este Tribunal en sentencia de 18 de julio de 2008 (5667/2005), "Sobre la cuestión relativa a la impugnación de Acuerdos colegiales de naturaleza presupuestaria (de la que, indubitadamente, participan las decisiones aquí recurridas) se ha pronunciado en diferentes ocasiones esta misma Sala, destacando con su claridad las sentencias de la Sección Octava de 18 de abril de 2001 y*



13 de marzo de 2002, cuyo planteamiento y contenido se asumen en su integridad.

*Se señala en dichas sentencias, y se reitera ahora, que Los Colegios Profesionales, en general, son corporaciones sectoriales de base privada, corporaciones públicas por su composición y organización que, sin embargo, realizan una actividad en gran parte privada, aunque tengan atribuidas, por ley, o, delegadas, algunas funciones públicas ( STC 123/87 y STS de 19/12/89 ), constituidas, primordialmente, para la defensa de los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público ( STC 20/88 y STS de 28/11/90 ), constituyendo "una realidad jurídica de base asociativa y régimen particular distinta del de las asociaciones de naturaleza privada" ( STC 5/96 ).*

*Ese carácter de Corporaciones públicas "no logra oscurecer la naturaleza privada de sus fines y cometidos principales" (STC 20/88), quedando limitada su equiparación a las Administraciones públicas de carácter territorial "a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión pública de los Colegios" (STC 87/89 ). Su configuración como Administración "secundum quid", obliga a examinar, caso por caso, si la actuación colegial se realiza en uso de facultades atribuidas por la ley o delegadas por la Administración, en cuyo caso la revisión jurisdiccional de dicha actuación corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, mientras que, en los restantes supuestos, el enjuiciamiento corresponderá al orden jurisdiccional civil.*

*Por su propia naturaleza, son ámbitos competenciales o fines privados de los Colegios profesionales los relativos a la protección mutua y la asistencia social de sus miembros y su familia y el "presupuesto" para el funcionamiento colegial. Dicho presupuesto se integra por la previsión anual de ingresos y gastos, no siendo fiscalizable por este orden jurisdiccional, cuya competencia se limita al control de la formación de*

*voluntad del órgano colegial que aprueba el presupuesto: la Junta General ordinaria del Colegio correspondiente.";*

*En resumen, las conclusiones que podemos obtener del criterio jurisprudencial defendido por el TS, es que las Corporaciones de derecho Público no son órganos administrativos integrados en el concepto de Administración Pública, sin embargo, su personalidad jurídica si es pública. Reconociendo a su vez su carácter "híbrido" con respecto a sus actuaciones. Y a la dualidad de regímenes jurídicos a los que se encuentran sometidas.*

Anexo nº 4.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES DE GESTIÓN DE DOP o IGP

DATOS DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN SOLICITANTE		
Nombre de la DOP o IGP:		
Nombre de la entidad de gestión:		NIF:
Razón social de la entidad de gestión:		
Domicilio:		
Provincia:	C.P.:	Población:
Teléfono:	Teléfono móvil:	Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE		
NIF <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	Número de documento:
Nombre:	1 <sup>er</sup> Apellido:	2º Apellido:
Domicilio:		
Provincia:	C.P.:	Población:
Teléfono:	Teléfono móvil:	Correo electrónico:

DATOS DE LA SOLICITUD
<b>Solicita</b> el reconocimiento como entidad de gestión de la DOP o IGP que figura en el primer apartado.

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General de la Industria Alimentaria con la finalidad de gestionar este expediente. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable en: Pº Infanta Isabel nº 1, 28014-MADRID o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al correo electrónico: [sgcdae@magrama.es](mailto:sgcdae@magrama.es)

#### ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

La persona abajo firmante, en representación de la entidad de gestión solicitante, declara, bajo su responsabilidad:

- 1.- Que esta entidad cumple con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico y que se compromete a cumplir con las obligaciones del artículo 16 de dicha ley.
- 2.- Que esta entidad cumple con los requisitos establecidos en los reglamentos comunitarios y que se compromete a cumplir y hacer cumplir el pliego de condiciones aprobado.
- 3.- Que todos los datos consignados son veraces, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello.

**Documentación:** Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:

- ☐ Copia tarjeta NIF o NIE
- ☐ Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación
- ☐ Documento notarial de la constitución de la entidad
- ☐ Copia de los Estatutos actualizados o Estatutos provisionales
- ☐ Otros

En ..... a ..... de ..... de .....

Fdo.: .....

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**